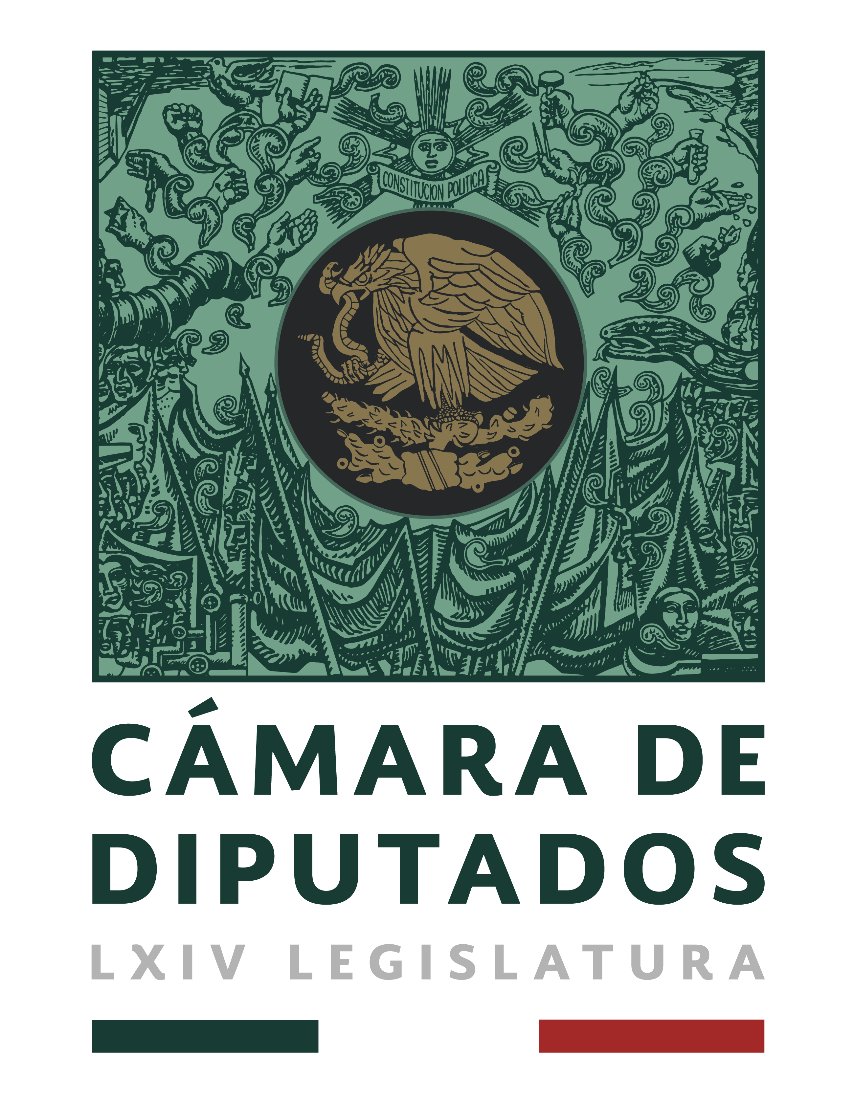
****

**Opinión al *Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018***

**Primer Entrega de informes Individuales**

**JUNIO 2019**

**Opinión al *Panorama de la primera entrega de informes individuales sobre la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2018***

El informe consta de 4 capítulos los cuales incluyen la fiscalización de la cuenta pública del año 2018. La primera entrega de informes individuales correspondientes a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2018, debe ser analizada como parte del proceso de fortalecimiento institucional iniciado hace poco más de un año.  
Los procesos sustantivos de la institución gradualmente se han reorientado, con base en la premisa de que no es necesario incrementar el número de revisiones, sino acrecentar su impacto, calidad y, gracias a ello, sus resultados efectivos.

Una institución como la ASF no puede ser indiferente ante la exigencia manifiesta de la sociedad por un cambio en la calidad y probidad de la gestión pública. Es claro que se requieren sanciones firmes ante hechos de corrupción; sin embargo, el sólo énfasis excesivo en el factor punitivo desvirtúa la incidencia positiva de la fiscalización en el plano preventivo y en la mejora global del ejercicio de los recursos.

Los resultados han sido tangibles: con corte al 12 de junio, se han atendido 8,858 acciones; cifra superior al total de acciones derivadas de la fiscalización de la Cuenta Pública 2017.

Una actitud crítica y de apertura al cambio es esencial para que la institución enfrente los desafíos inherentes a la dinámica de nuestro sector público y demuestre su valor y posición clave para enfrentar fenómenos complejos como la corrupción, la ineficiencia y el abuso del poder, así como para lograr que la acción fiscalizadora tenga efectos tangibles en el ejercicio pleno de los derechos de los mexicanos.

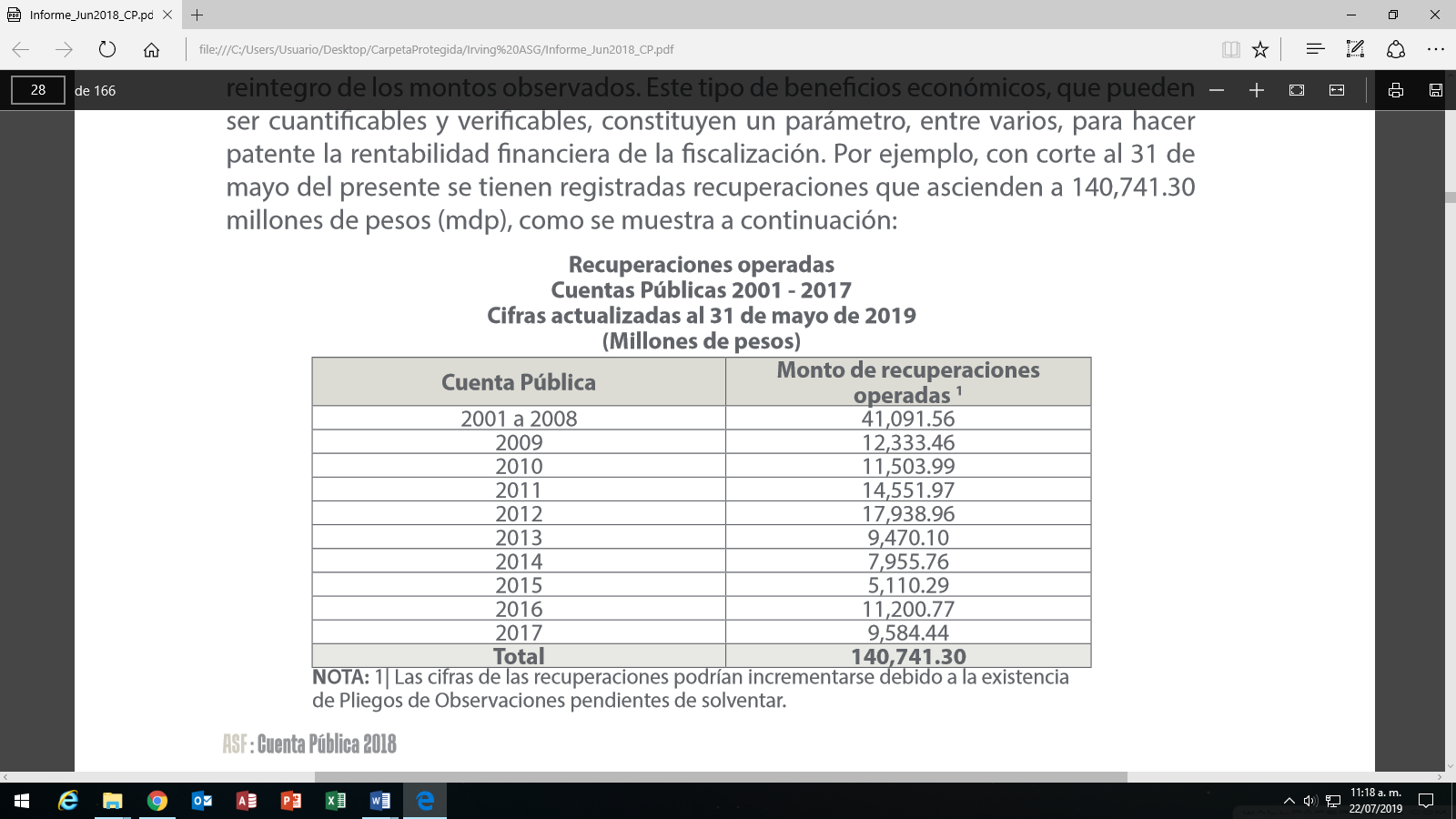
A partir de la convicción de que la rendición de cuentas es un aspecto imprescindible para la vida democrática, el presente documento busca convertirse en punto de referencia para la ciudadanía, entes auditados y legisladores para adentrarse y profundizar a detalle en el contenido de las 268 auditorías que integran la primera entrega de informes individuales correspondientes a la revisión de la Cuenta Pública 2018.

Esta entrega de informes individuales incluye 268 revisiones (187 de cumplimiento financiero, 18 de desempeño y 63 que involucran ambos tipos de enfoques), los cuales representan el 17% del total de 1,572 auditorías programadas sobre la Cuenta Pública 2018. Este Marco de referencia está integrado por cuatro capítulos.

El primero describe las líneas generales de la nueva perspectiva institucional para la fiscalización de proyectos de obra pública e infraestructura. El segundo incluye una síntesis de las principales conclusiones de una selección de auditorías relevantes, entre las que se encuentran temas como las evaluaciones de la calidad educativa, el proceso de reconstrucción por las afectaciones provocadas por los sismos del 2017, la política nacional contra la trata de personas, la rehabilitación de plantas de fertilizantes nitrogenados de Petróleos Mexicanos, entre otros temas. El tercer capítulo hace referencia al seguimiento de asuntos auditados previamente que, en virtud de su relevancia, ameritaron retomar aspectos centrales sobre los resultados de la fiscalización practicada, así como puntualizar las acciones subsecuentes que se emprenderán para darle continuidad a su revisión. Entre estos temas se encuentra el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, problemas estructurales en las políticas públicas y lo referente a las Empresas Productivas del Estado. El último capítulo incluye una serie de consideraciones sobre los desafíos que enfrenta la fiscalización superior respecto al tratamiento de temas complejos de actualidad, así como sobre la adopción de nuevas tecnologías aplicadas a las labores auditoras.

Cabe destacar que la ASF busca posicionarse como un actor clave para el fortalecimiento de las políticas públicas y las instituciones, con el fin de promover el correcto ejercicio presupuestal y la buena gobernanza a nivel nacional. El objetivo es incrementar el impacto de las acciones correctivas derivadas de las revisiones, la promoción de su valor preventivo a través de la identificación de la causa-raíz de las problemáticas observadas, la incorporación de auditorías con enfoques temático e integral y la priorización de los objetos y sujetos auditables a partir de una metodología basada en factores de riesgo.

El ejercicio fiscalizador tiene como una de sus consecuencias más evidentes el generar un efecto positivo, en términos presupuestales para el Estado, a través de la emisión de acciones y observaciones, cuando se identifica un posible daño o perjuicio al erario o al patrimonio de los entes públicos, las cuales pueden ser solventadas a través del reintegro de los montos observados. Este tipo de beneficios económicos, que pueden ser cuantificables y verificables, constituyen un parámetro, entre varios, para hacer patente la rentabilidad financiera de la fiscalización. Por ejemplo, con corte al 31 de mayo del presente se tienen registradas recuperaciones que ascienden a 140,741.30 millones de pesos (mdp), como se muestra a continuación:

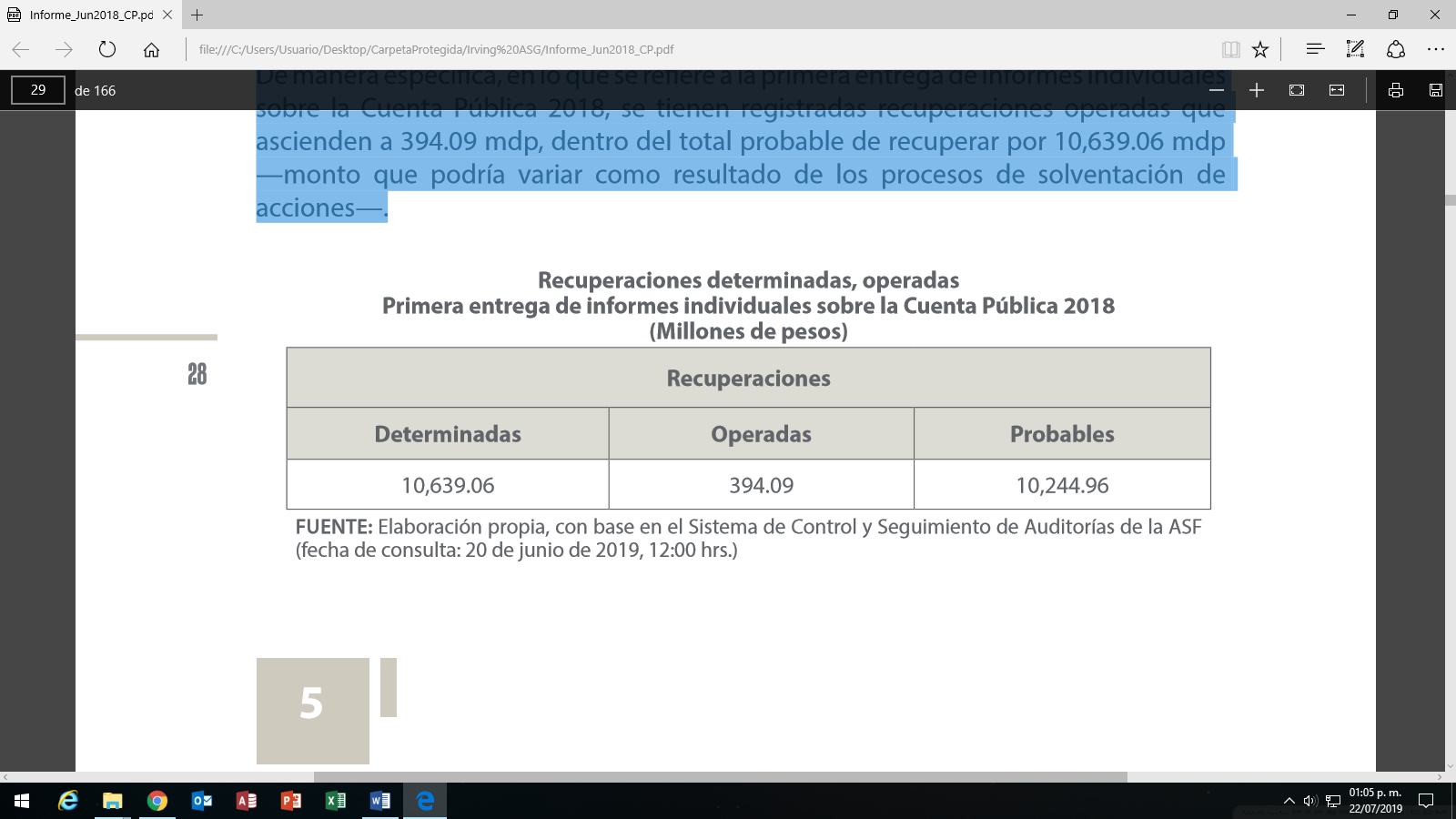


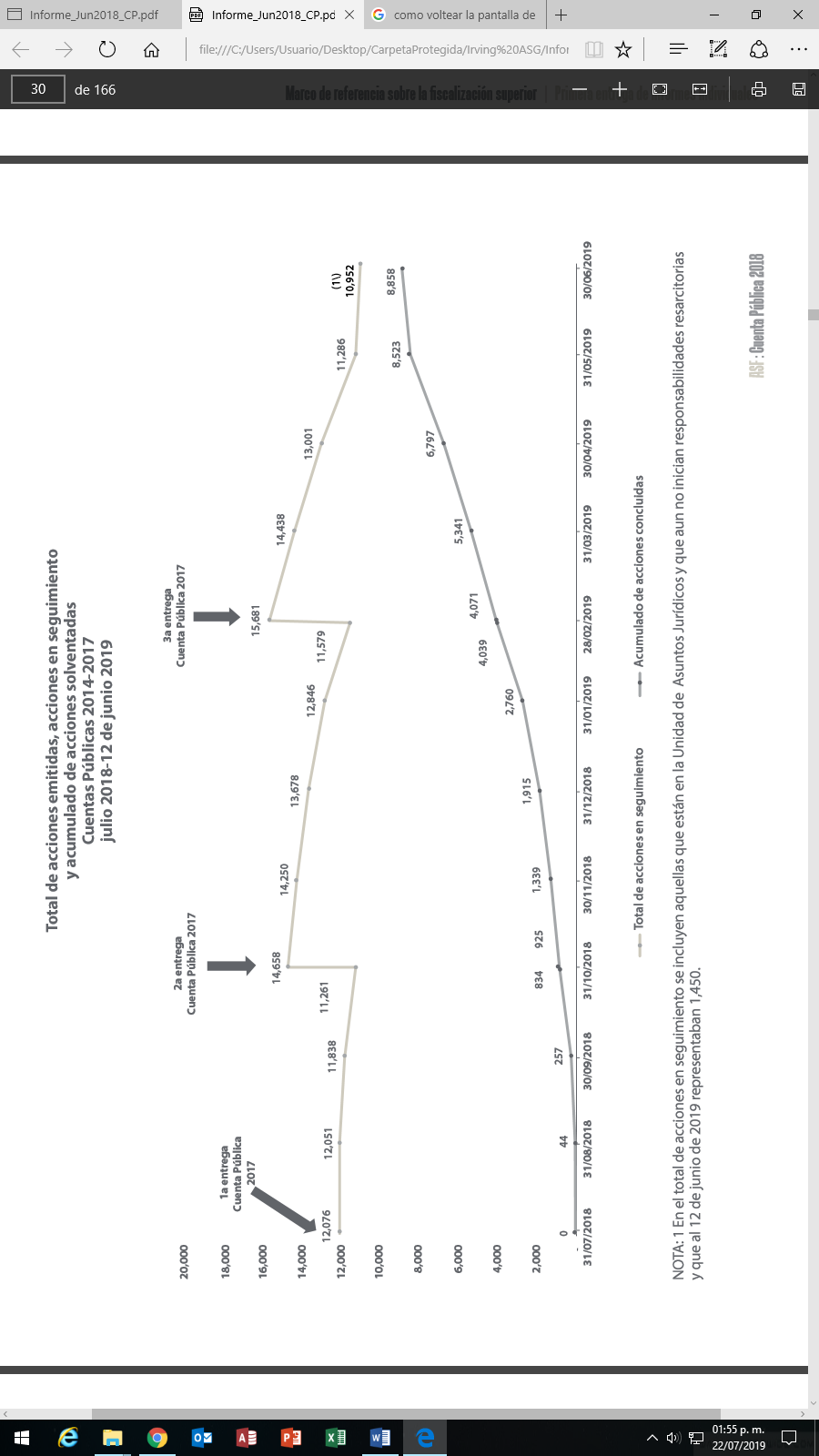
Hasta julio de 2018, se contabilizó un total de 12,095 acciones pendientes de atender, las cuales se suman a las derivadas de la segunda y tercera entregas correspondientes a la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, que ascienden a 7,657 acciones.

Para la Primera entrega de informes individuales, se tomaron en cuenta:

* 18 auditorías de desempeño
* 187 auditorías de cumplimiento financiero
* 63 auditorías combinadas de cumplimiento y desempeño

De manera específica, en lo que se refiere a la primera entrega de informes individuales sobre la Cuenta Pública 2018, se tienen registradas recuperaciones operadas que ascienden a 394.09 mdp, dentro del total probable de recuperar por 10,639.06 mdp —monto que podría variar como resultado de los procesos de solventación de acciones—.



Hasta julio de 2018, se contabilizó un total de 12,095 acciones pendientes de atender, las cuales se suman a las derivadas de la segunda y tercera entregas correspondientes a la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, que ascienden a 7,657 acciones.

Actualmente, el seguimiento de dichas acciones y la atención al referido rezago es responsabilidad de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación; área que ha logrado desahogar 8,858 acciones, como se muestra a continuación:

Para el capítulo 1; Nueva estrategia para la fiscalización de obra pública e infraestructura, se destaca que la ejecución de obra pública en nuestro país constituye un rubro estratégico de la gestión de los entes públicos, por lo general se destaca su relevancia como factor generador de crecimiento económico; por ejemplo, a través de la construcción, mantenimiento o reparación de vías de comunicación que facilitan el comercio y la distribución de mercancías o productos, o su impacto en la creación de empleos, es igualmente importante resaltar la relevancia que tiene este tipo de inversiones en la mejora de las condiciones de vida de la población, debido a la diversidad de proyectos involucrados, incluyendo la ampliación o renovación de vías de comunicación, lo cual facilita el traslado de personas y mercancías, así como la prestación oportuna de servicios de salud, vivienda, seguridad pública, educación, asistencia en caso de emergencia, entre otros.

Un tema de discusión recurrente ha sido la heterogeneidad en la regulación de los procesos de licitación y ejecución de obras en el orden federal y estatal. De manera específica, se ha advertido la relevancia de armonizar los ordenamientos vinculados con la determinación de los montos máximos y criterios para exceptuar los procedimientos de licitación, así como el límite de convenios modificatorios autorizables.

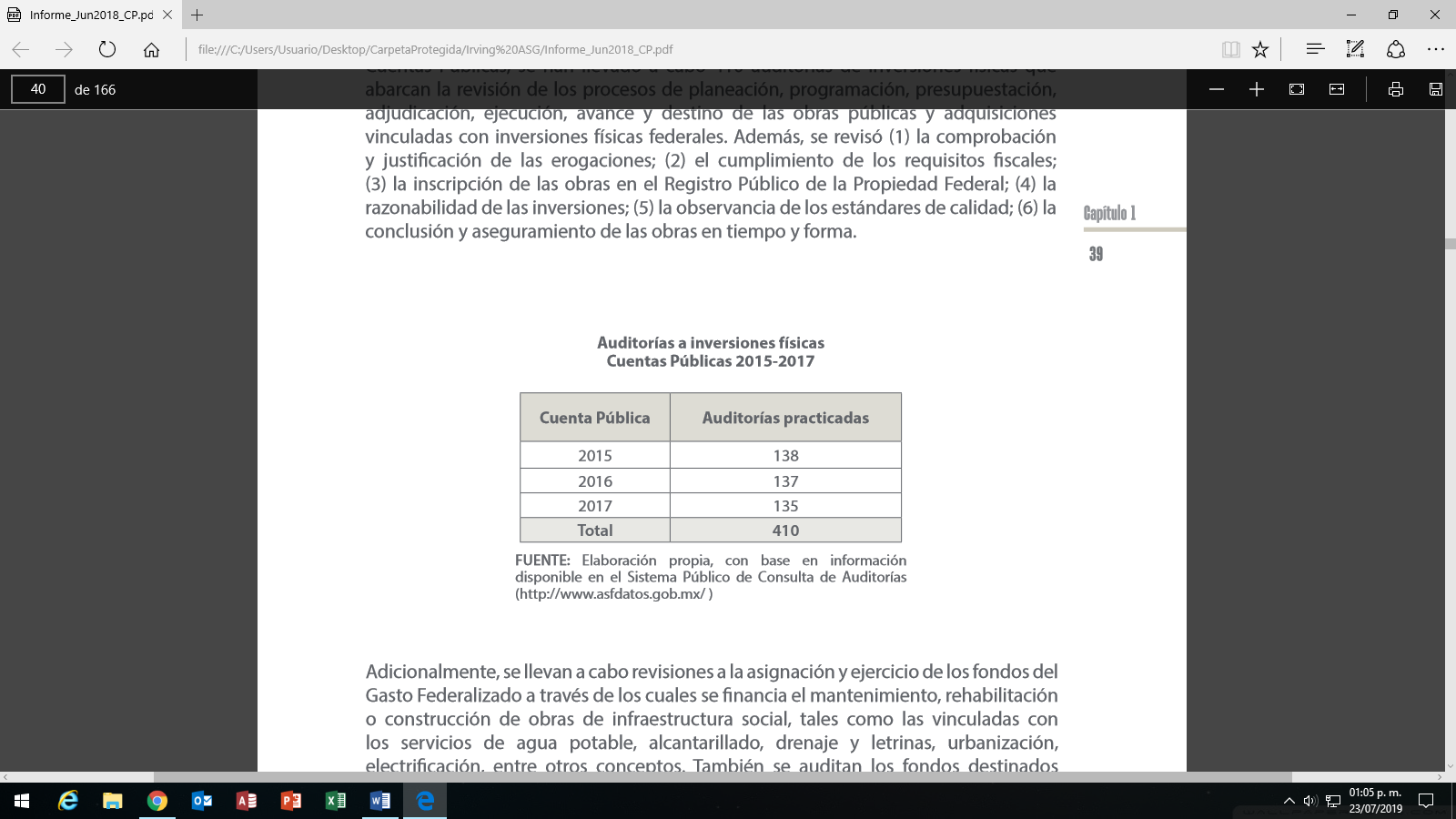
La fiscalización de obra pública es el procedimiento de verificación del cumplimiento de los objetivos dispuestos en las leyes, normas, planes y programas en la materia. En este sentido, a través de las auditorías se busca obtener un juicio suficientemente razonable sobre el desempeño de los entes responsables de las contrataciones bajo los preceptos de legalidad, eficacia y eficiencia. La auditoría de obra pública, además de la revisión de los elementos económico-financieros, tiene por objeto el análisis de los aspectos técnicos que se vinculan con la calidad general y estructural del proyecto, lo que repercute en la seguridad de los usuarios.

En el caso del Sector Público Presupuestario, los recursos destinados a inversiones físicas son ejercidos, principalmente, por las siguientes instancias: Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

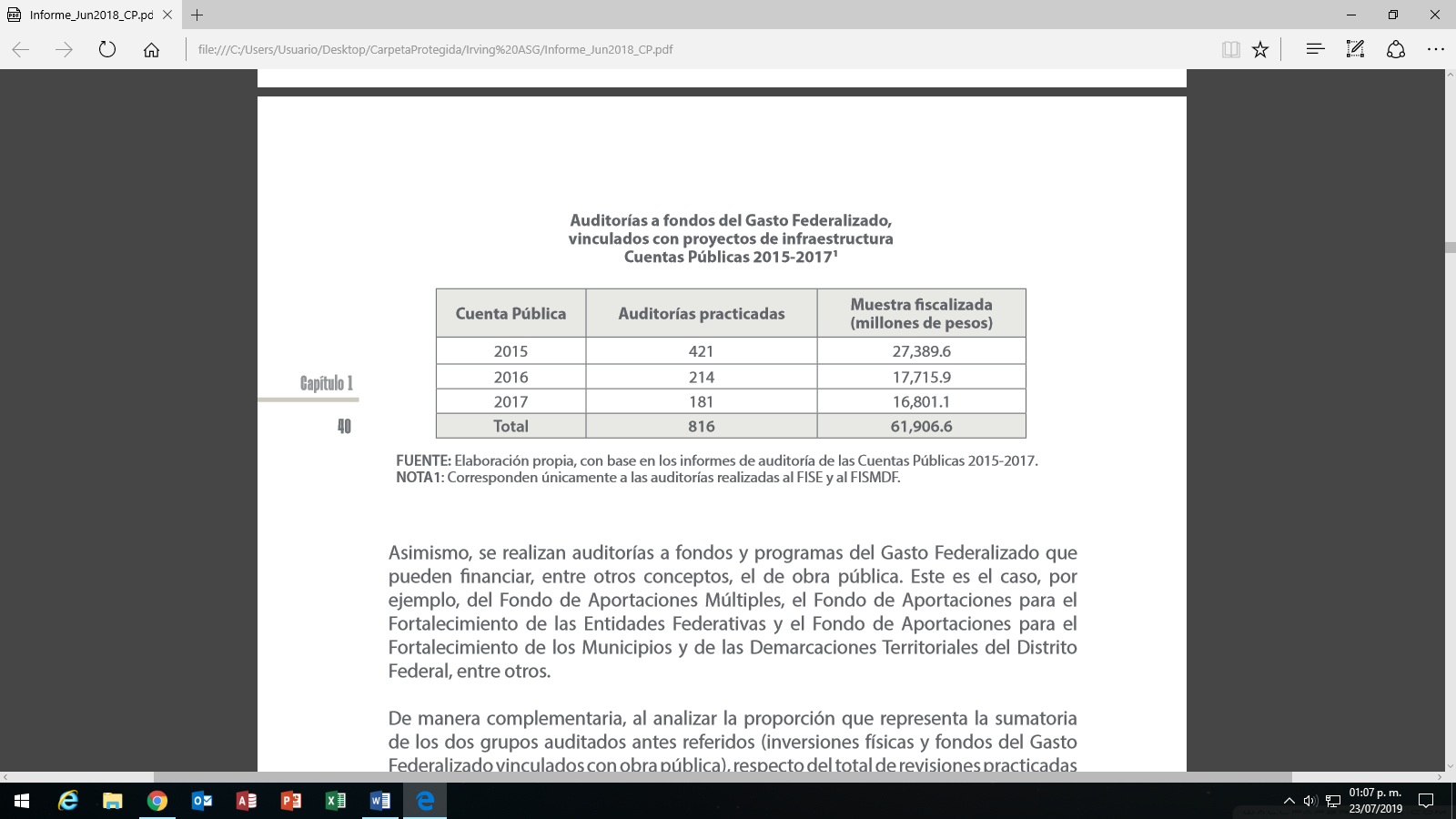
Se puede apreciar en la siguiente tabla, parte de las últimas tres Cuentas Públicas, se han llevado a cabo 410 auditorías de inversiones físicas que abarcan la revisión de los procesos de planeación, programación, presupuestación, adjudicación, ejecución, avance y destino de las obras públicas y adquisiciones vinculadas con inversiones físicas federales.

Dentro de estas auditorías fueron revisadas:

* la comprobación y justificación de las erogaciones
* el cumplimiento de los requisitos fiscales
* la inscripción de las obras en el Registro Público de la Propiedad Federal
* la razonabilidad de las inversiones
* la observancia de los estándares de calidad
* la conclusión y aseguramiento de las obras en tiempo y forma.



También se auditan los fondos destinados al desarrollo de infraestructura de los sectores salud y educación. Como se puede observar en la siguiente tabla, como parte de la fiscalización de las Cuentas Públicas de 2015 a 2017, se han llevado a cabo 816 auditorías, al Fondo de la Infraestructura Social para las Entidades (FISE) y al Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), las cuales, en conjunto, implican una muestra fiscalizada de 61,906.6 mdp; estos fondos del Ramo 33 se destinan fundamentalmente a la realización de obra pública.



Se han realizado auditorías a fondos y programas del Gasto Federalizado que pueden financiar, entre otros conceptos, el de obra pública. Por ejemplo, del Fondo de Aportaciones Múltiples, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, entre otros.

Como parte de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2018, se programaron 296 auditorías (136 revisiones a inversiones físicas y 160 revisiones al FISE y al FISMDF), desde los enfoques de cumplimiento financiero, así como en combinación con el enfoque de desempeño. Algunos de los proyectos relevantes incluidos en el PAAF son los siguientes:

* Revisión de proyectos de infraestructura en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
* Construcción del embovedamiento del Río de los Remedios, tramos oriente y poniente, en el Estado de México
* Obras relacionadas con el Sistema Cutzamala
* Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la zona metropolitana de Guadalajara
* Tren Interurbano México-Toluca, en el Estado de México
* Construcción de la losa de cimentación del centro de transporte terrestre intermodal y de la losa de cimentación del edificio terminal del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
* Proyectos especiales de mantenimiento, adecuación de infraestructura, instalación de estructuras, rehabilitaciones, interconexiones y montaje de equipos en instalaciones marinas de Pemex Exploración y Producción en el Golfo de México
* Ampliación de la Línea 12 Mixcoac-Observatorio, en la Ciudad de México
* Construcción del corredor vial para el transporte público Línea 5 del Metrobús, segunda etapa, en el eje 3 oriente, en el tramo de San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos, en la Ciudad de México
* Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, en el Estado de Nuevo León

A partir de las auditorías practicadas en los últimos años a proyectos de obra pública e infraestructura, se ha podido identificar una serie de problemáticas recurrentes en las cuatro etapas de su desarrollo (planeación, contratación, ejecución y supervisión).

Planeación

La fase de planeación de las obras conlleva el análisis, integración y sistematización de información sobre las necesidades de inversión en la materia, de conformidad con la normativa aplicable, los documentos rectores de estrategias nacionales y sectoriales, como el Plan Nacional de Desarrollo o el Programa Nacional de Infraestructura, y de acuerdo con el mandato y los objetivos de los entes públicos.  
Se resalta que en esta etapa, las instancias contratantes de obra deben contar con los estudios preliminares o anteproyectos necesarios para justificar el tipo de obra requerida, su localización, los beneficios sociales esperados, el monto total estimado de la inversión, incluyendo los costos de operación y mantenimiento, tiempo previsto de conclusión de la obra y demás información relevante.

Contratación

En términos generales, y de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la contratación de proveedores externos para la prestación de algún servicio, así como para el arrendamiento o adquisición de bienes o productos, se lleva a cabo, preferentemente1, a través de licitaciones públicas, con el fin de asegurar las mejores condiciones para el Estado, en términos de precio, calidad, financiamiento, oportunidad y crecimiento económico. Lo mismo ocurre en el caso de los contratos de obras públicas, ya que la LOPSRM dispone las mismas condiciones.

Ejecución

Consiste en la puesta en marcha de los distintos trabajos requeridos para la construcción, mantenimiento o reparación de obras, conforme a las condiciones pactadas en los contratos, y de conformidad con el programa, calendario autorizado, normas de calidad de materiales y equipos, y especificaciones técnicas correspondientes. De manera general, la ejecución de las obras implica llevar a cabo actividades como la selección y contratación del personal requerido, la preparación de documentos, estudios, planos, guías o programas específicos, así como la selección y adquisición de materiales, equipos y tecnología.

Supervisión

Esta actividad involucra los servicios de monitoreo y gerencia del desarrollo de los proyectos. De manera general, quienes desempeñan estas actividades deben contar con las competencias necesarias para identificar deficiencias y fallas en el diseño y construcción de las obras. Las tareas de supervisión abarcan la revisión del cumplimiento del programa de ejecución de los trabajos, con el propósito de verificar la observancia de los tiempos estimados de entrega, de acuerdo con los estándares de calidad, normas constructivas y de seguridad correspondientes, así como de conformidad con las especificaciones pactadas del proyecto. Inclusive, en algunos casos, los supervisores, de manera conjunta con los gerentes de los proyectos, se encargan del control presupuestario y de costos.

Cabe mencionar que la ASF está llevando a cabo el rediseño de la actual estructura operativa dedicada a la fiscalización de obras públicas e infraestructura, en el marco de la búsqueda permanente por ofrecer a la ciudadanía y a los entes gubernamentales mejores herramientas e información sustantiva sobre los resultados e impacto del ejercicio de los recursos públicos, así como incidir de manera positiva, en la prevención y sanción efectiva de irregularidades y actos de corrupción.

Dentro del capítulo 2; podemos encontrar las Auditorías relevantes incluidas en la primera entrega de informes individuales, en las cuales se explica cada una de ellas.

**Evaluaciones de la calidad de la educación Auditorías: 96-GB y 97-GB**

En el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa Sectorial de Educación 2013 2018 se destacó la carencia de información consistente sobre los resultados de las evaluaciones de la calidad de la educación, así como la falta de vinculación entre éstos y la toma de decisiones de las autoridades educativas.

En términos generales, para atender esta problemática se dispuso la conformación del Sistema Nacional para la Evaluación Educativa (SNEE) y se ampliaron las facultades del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), en relación con la coordinación de dicho sistema; la implementación de la Política Nacional de Evaluación de la Educación (PNEE); la expedición de los lineamientos para regular las evaluaciones del Sistema Educativo Nacional (SEN); el diseño y aplicación de las evaluaciones de los planes y programas de estudio, alumnos, escuelas y gestión escolar; el establecimiento de modelos de evaluación integrales; la difusión de los resultados de las mediciones; la promoción de su uso para la toma de decisiones de las autoridades educativas, y la emisión de directrices para la mejora de la calidad de la educación. Adicionalmente, a la Secretaría de Educación Pública (SEP), de acuerdo con la Ley General de Educación, le correspondió diseñar y aplicar las evaluaciones del Servicio Profesional Docente (SPD), así como difundir y usar sus resultados como insumos para la mejora continua en cada ciclo escolar.

Los resultados de las auditorías mostraron que, durante el periodo 2014-2018, existió desarticulación y falta de sinergia en la coordinación del SNEE, debido a que no se suscribieron acuerdos con las autoridades educativas, para analizar los alcances e implicaciones de las directrices emitidas, así como sobre el uso estratégico de las conclusiones de las evaluaciones. Se identificó que el INEE careció de una planeación integral y estratégica, con un enfoque sistémico para implementar la PNEE de forma efectiva.

Resultados obtenidos

Evaluaciones de alumnos

* La prueba aplicada a los alumnos de 6º de primaria en el ciclo 2017-2018, mostró que el porcentaje de alumnos ubicados en el nivel de conocimiento I (insuficiente), en lenguaje y comunicación, fue de 49.1%; resultado menor en 0.4 puntos porcentuales al del ciclo 2014-2015 (49.5%), mientras que en matemáticas fue de 59.1%; cifra inferior en 1.4 puntos porcentuales a la del ciclo 2014-2015 (60.5%)1.
* En la prueba correspondiente a los alumnos de 3º de secundaria en el ciclo 2016-2017, el porcentaje de alumnos en el nivel I en lenguaje y comunicación, fue de 33.8%; resultado mayor en 4.4 puntos porcentuales al del ciclo 2014-2015 (29.4%), y en matemáticas fue de 64.5%; cifra inferior en 0.9 puntos porcentuales con respecto a la del ciclo 2014-2015 (65.4%).

Evaluaciones de docentes

* Respecto al ingreso al SPD de los ciclos escolares de 2014-2015 al 2018-2019, en educación básica la proporción de aspirantes con resultados idóneos se incrementó de 39.6% a 58.2%, y en media superior de 32.9% a 45.9%

**Proceso de reconstrucción por las afectaciones provocadas por los sismos de 2017 Auditorías: 52-GB, 56-GB, 61-GB, 74-GB, 106-DS, 132-DS, 179-DS, 214-DS, 217-DS y 220-DS**

Como parte de la fiscalización de la Cuenta Pública 2018, la ASF auditó la reconstrucción o rehabilitación de escuelas de educación básica, hospitales y viviendas, por los daños ocasionados por las afectaciones provocadas por los sismos ocurridos en septiembre de 2017, así como la recepción de donativos nacionales e internacionales.

En materia de donativos, el Estado no garantizó que fueran entregados en beneficio de la población damnificada, ya que careció de un mecanismo ágil, transparente y efectivo para su recepción, administración, control, distribución y supervisión, en cumplimiento de la Ley General de Protección Civil (LGPC).

De acuerdo con información pública disponible al 29 de mayo de 2019, por parte del Servicio de Administración Tributaria, se entregaron a las donatorias autorizadas 5,083.0 millones de pesos (mdp); sin embargo, no se precisó el monto correspondiente al fideicomiso Fuerza México ni el desglose de los efectos fiscales por las deducciones aplicables. Del referido monto, 2,460.0 mdp (48.4%) se reportaron como distribuidos entre las entidades federativas afectadas por los sismos.

En cuanto a los donativos internacionales, la SRE no llevó a cabo un registro de los mismos, aun cuando la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo dispone que en el Registro Nacional de la Cooperación Internacional para el Desarrollo (RENCID) deberán quedar inscritos los montos, modalidades y ejercicio de los recursos financieros, donaciones y las aportaciones en especie provenientes de gobiernos extranjeros y organismos internacionales.

* En el sector educativo, de las 19,194 escuelas afectadas, la SEP y el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED) no comprobaron la evaluación de daños en 7,917 escuelas (41.2%), y no documentaron, de manera eficiente, los informes de avance físico y financiero de las obras. Además, en los registros del INIFED se señaló que en 12,035 (62.7%) de las 19,194 escuelas se concluyó la reconstrucción y la rehabilitación de los planteles; sin embargo, se no se dispuso de la evidencia suficiente que lo acreditara.
* En el sector salud, la Secretaría de Salud reportó un avance del 21.2% por la conclusión de los trabajos en 28 unidades médicas de las 132 identificadas con afectaciones; sin embargo, careció de la evidencia documental para comprobar la conclusión de los proyectos. Asimismo, la dependencia mostró inconsistencias en el proceso de diagnóstico, ya que en la evaluación de daños se identificaron 39 unidades médicas afectadas, en los diagnósticos se contabilizaron 132, mientras que en el programa de obras se registraron 44 inmuebles.
* En el sector de la vivienda, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) careció de un padrón confiable sobre las viviendas afectadas. Por un lado, en los diagnósticos definitivos identificó 172,057 viviendas, mientras que en los programas de obras y acciones la cantidad fue de 168,256. Adicionalmente, en dos bases de datos institucionales se encontraron diferencias en el número de viviendas registradas: en una se totalizaron 170,199 viviendas y en otra 170,871. La dependencia presentó a la ASF una base de datos sobre la entrega, a través del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., de 166,872 tarjetas con apoyos para reconstrucción y rehabilitación de viviendas por 8,157.375 mdp; de su revisión se detectó que 2,378 tarjetas, que en conjunto totalizan 117.820 mdp, se otorgaron sin atender las discrepancias encontradas en la información sobre los beneficiarios.

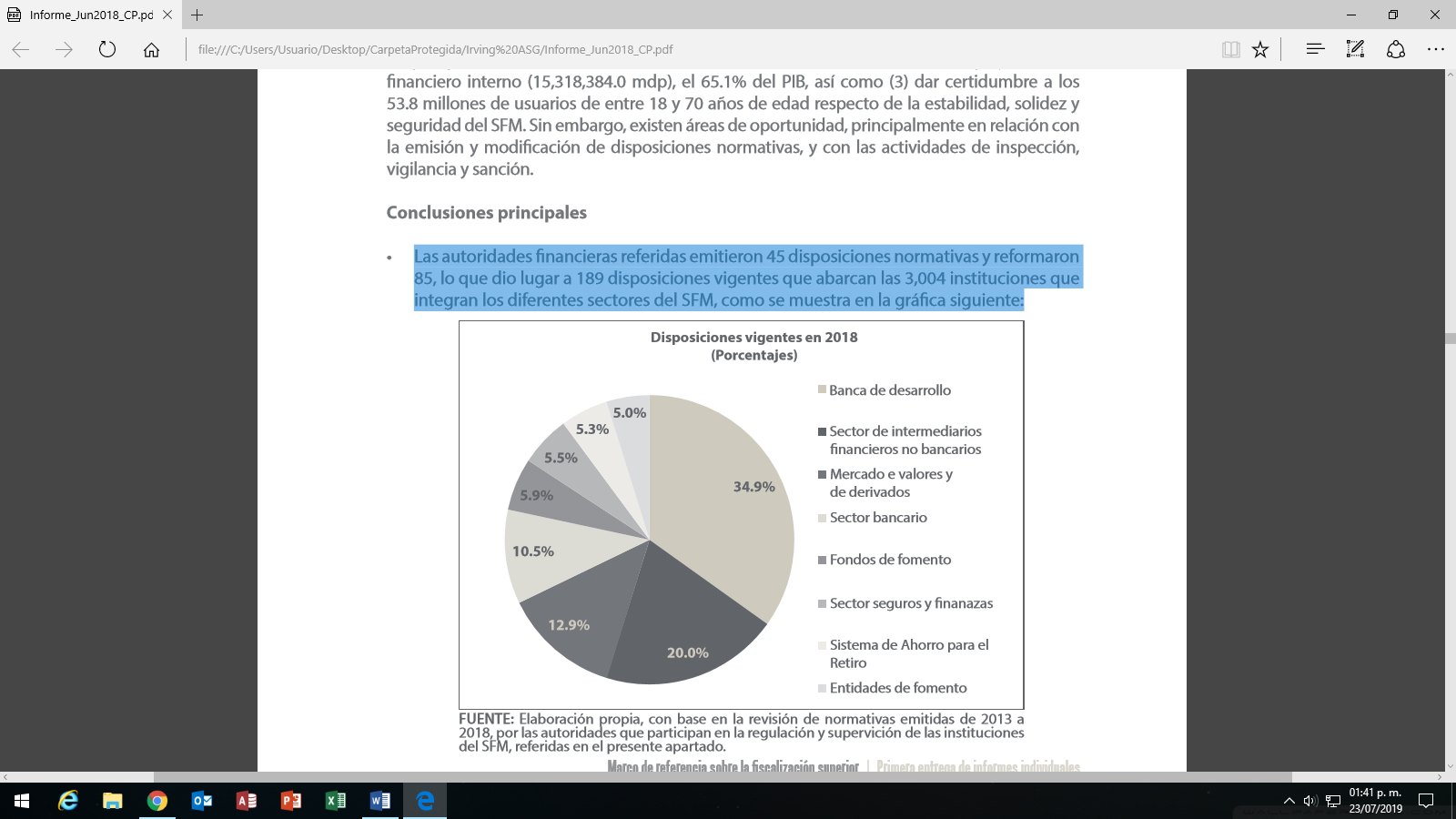
La SEDATU desconoció si la totalidad de los beneficiarios reconstruyeron o rehabilitaron sus viviendas, ya que aun cuando los Lineamientos de Operación Específicos del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales señalan la obligación de llevar a cabo la supervisión de los trabajos, la dependencia sólo reportó la supervisión de 59,380 viviendas.

**Sistema financiero: regulación y supervisión Auditoría: 51-GB**

En 2018, la regulación y supervisión a las instituciones del Sistema Financiero Mexicano (SFM) realizada por la SHCP, el Banco de México, la CNBV, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, permitieron establecer medidas prudenciales y vigilar su funcionamiento, de acuerdo con la normativa vigente y con los estándares y buenas prácticas financieras, a fin de contribuir a:

* atenuar su exposición a eventos negativos, que podrían afectar su sano y equilibrado desarrollo;
* lograr que el financiamiento interno al sector privado (8,252,127.0 mdp) representara el 35.1% del Producto Interno Bruto (PIB) (23,542,737.2 mdp), y el ahorro financiero interno (15,318,384.0 mdp), el 65.1% del PIB.
* También se consideró, dar certidumbre a los 53.8 millones de usuarios de entre 18 y 70 años de edad respecto de la estabilidad, solidez y seguridad del SFM. Sin embargo, existen áreas de oportunidad, principalmente en relación con la emisión y modificación de disposiciones normativas, y con las actividades de inspección, vigilancia y sanción.

Las autoridades financieras referidas emitieron 45 disposiciones normativas y reformaron 85, lo que dio lugar a 189 disposiciones vigentes que abarcan las 3,004 instituciones que integran los diferentes sectores del SFM, como se muestra en la gráfica siguiente:



En donde la participación de la banca de desarrollo posicionándose con el 34.9% seguido del sector de intermediarios financieros no bancarios.

**Seguridad pública: trata de personas Auditoría: 302-DS**

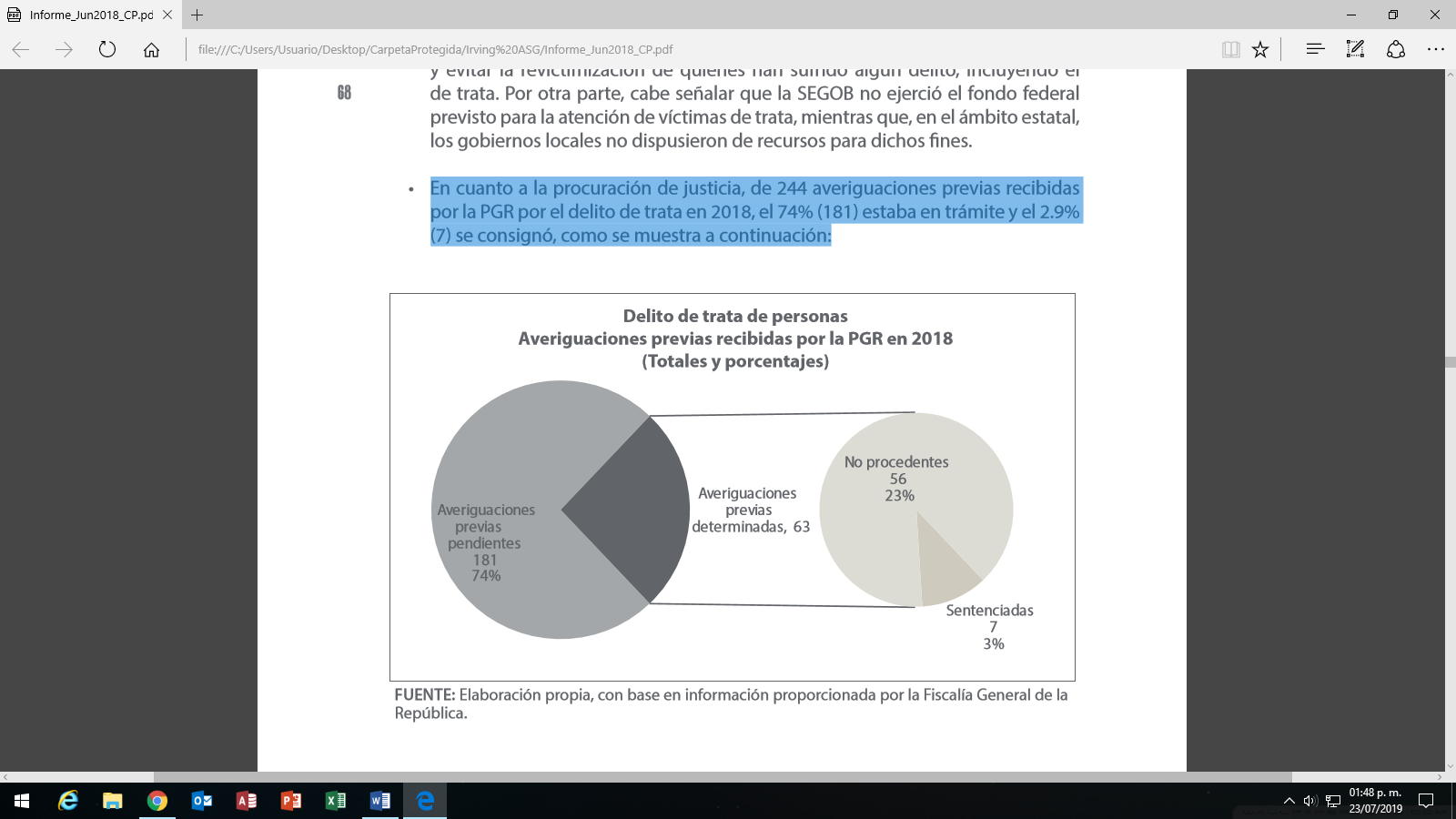
La trata de personas es un fenómeno delictivo que está extendido por todo el mundo. Las víctimas son, principalmente, mujeres, niñas y niños, quienes son capturadas, trasladadas, vendidas y compradas con fines de explotación, lo que vulnera, de manera directa, sus derechos humanos fundamentales: libertad, integridad, dignidad, no explotación y el libre desarrollo de su personalidad. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la trata de personas es el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo, sólo superado por el tráfico de drogas y de armas.

En el marco de la Comisión Intersecretarial se identificaron diversas problemáticas, tales como:

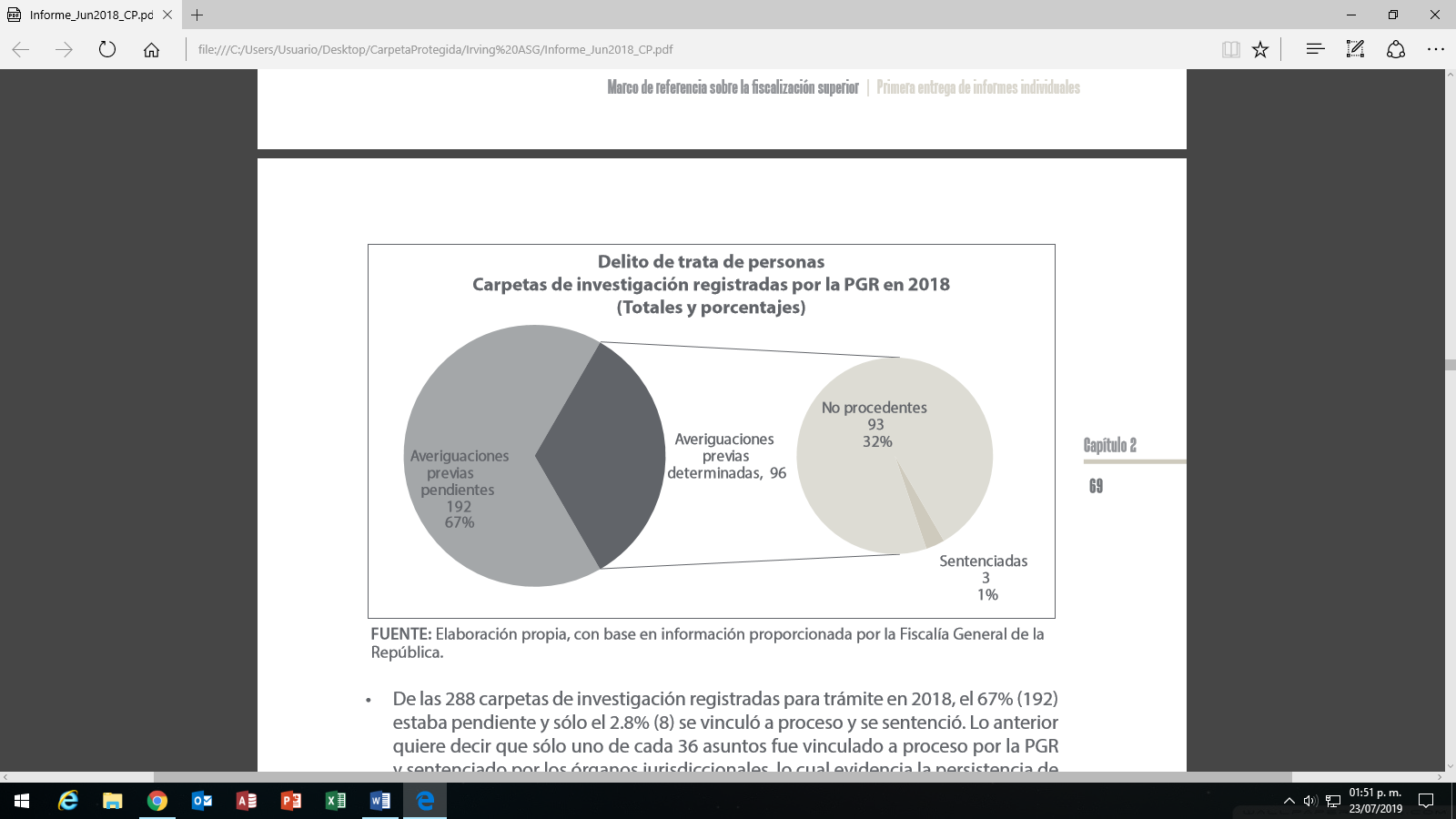
* la SEGOB fungió como presidente y evaluador de la Comisión, lo que limitó su participación objetiva e imparcial;
* cuatro de los cinco grupos de trabajo no sesionaron en 2018;
* no se cuenta con información suficiente para conocer el cumplimiento del 72.4% de los 163 acuerdos establecidos, en tanto que el 27.6% de éstos se relacionan con temas administrativos;
* las actas de las sesiones de la Comisión no hacen referencia a las posturas y votaciones de sus integrantes
* existe una inadecuada coordinación con los gobiernos estatales, lo que ocasionó que ninguna de las 32 entidades federativas dispusiera de los diez mecanismos previstos para asegurar la eficaz atención del delito de trata de personas.

En materia de prevención del delito de trata, la Comisión Intersecretarial implementó, en coordinación con las entidades que la integran, 653,115 acciones de difusión, en tanto que, de manera independiente, dichas entidades y los gobiernos estatales efectuaron 1,025,819 acciones de difusión, lo que evidenció una limitada coordinación para la prevención del delito.

En cuanto a la procuración de justicia, de 244 averiguaciones previas recibidas por la PGR por el delito de trata en 2018, el 74% (181) estaba en trámite y el 2.9% se consignó, como se muestra a continuación:



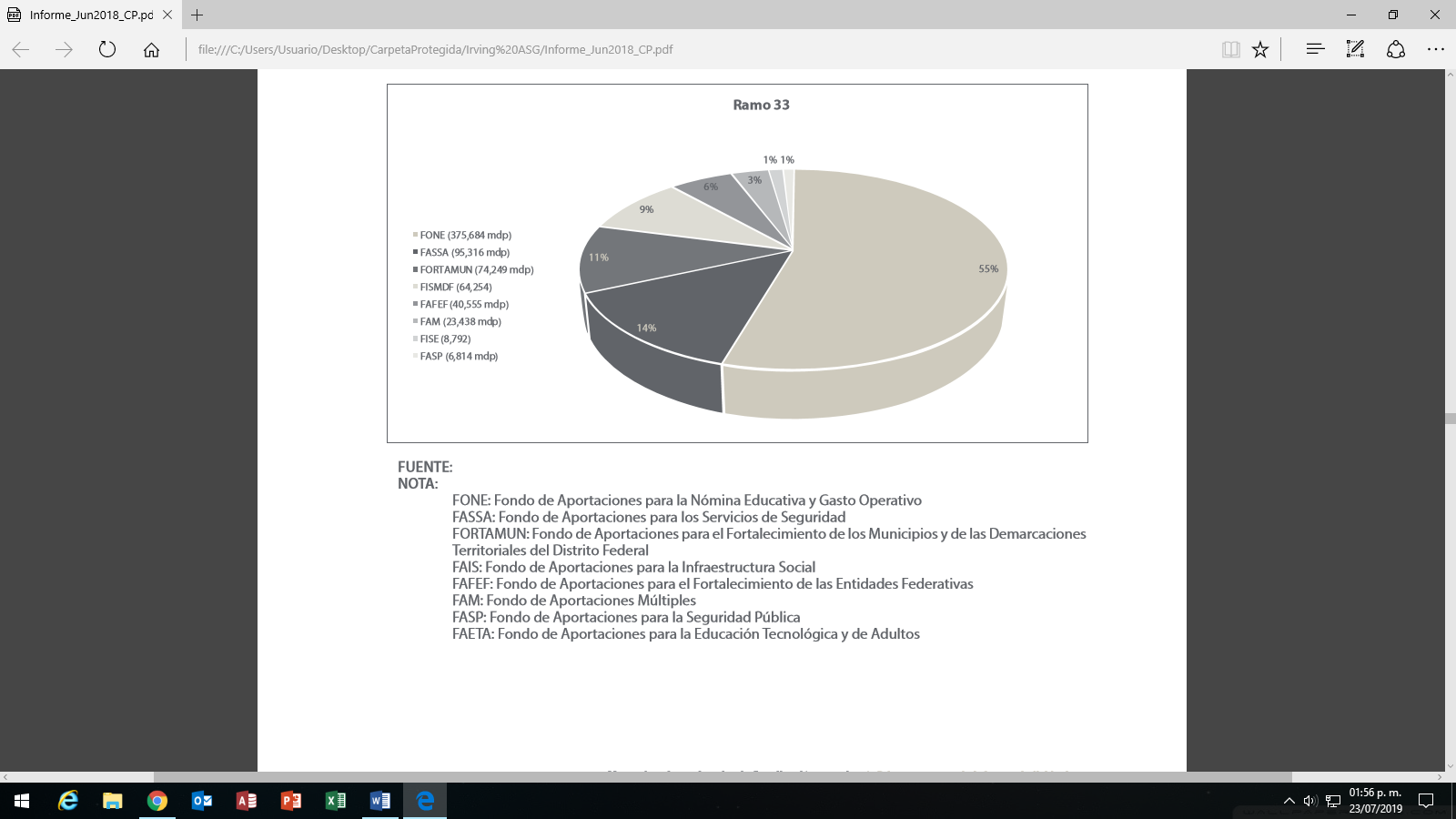
De las 288 carpetas de investigación registradas para trámite en 2018, el 67% (192) estaba pendiente y sólo el 2.8% se vinculó a proceso y se sentenció. Lo anterior quiere decir que sólo uno de cada 36 asuntos fue vinculado a proceso por la PGR y sentenciado por los órganos jurisdiccionales, lo cual evidencia la persistencia de un entorno de impunidad en la comisión de dicho delito.



Como parte de la primera entrega de informes individuales de auditoría, a continuación, se presentan los principales resultados de las revisiones practicadas al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) —dichos fondos representan, en conjunto, el 22.9% del total de los recursos ejercidos a través del Ramo 33 (ver gráfica)— y al Programa Escuelas al CIEN.

Adicionalmente, cabe señalar que en el sitio de internet de la institución están disponibles los informes individuales de las revisiones efectuadas (33 del FAM, FASSA y FAFEF, en cada caso, y 32 del Programa Escuelas al CIEN). En dichos informes se pueden consultar a detalle los resultados que se incluyen en este apartado.

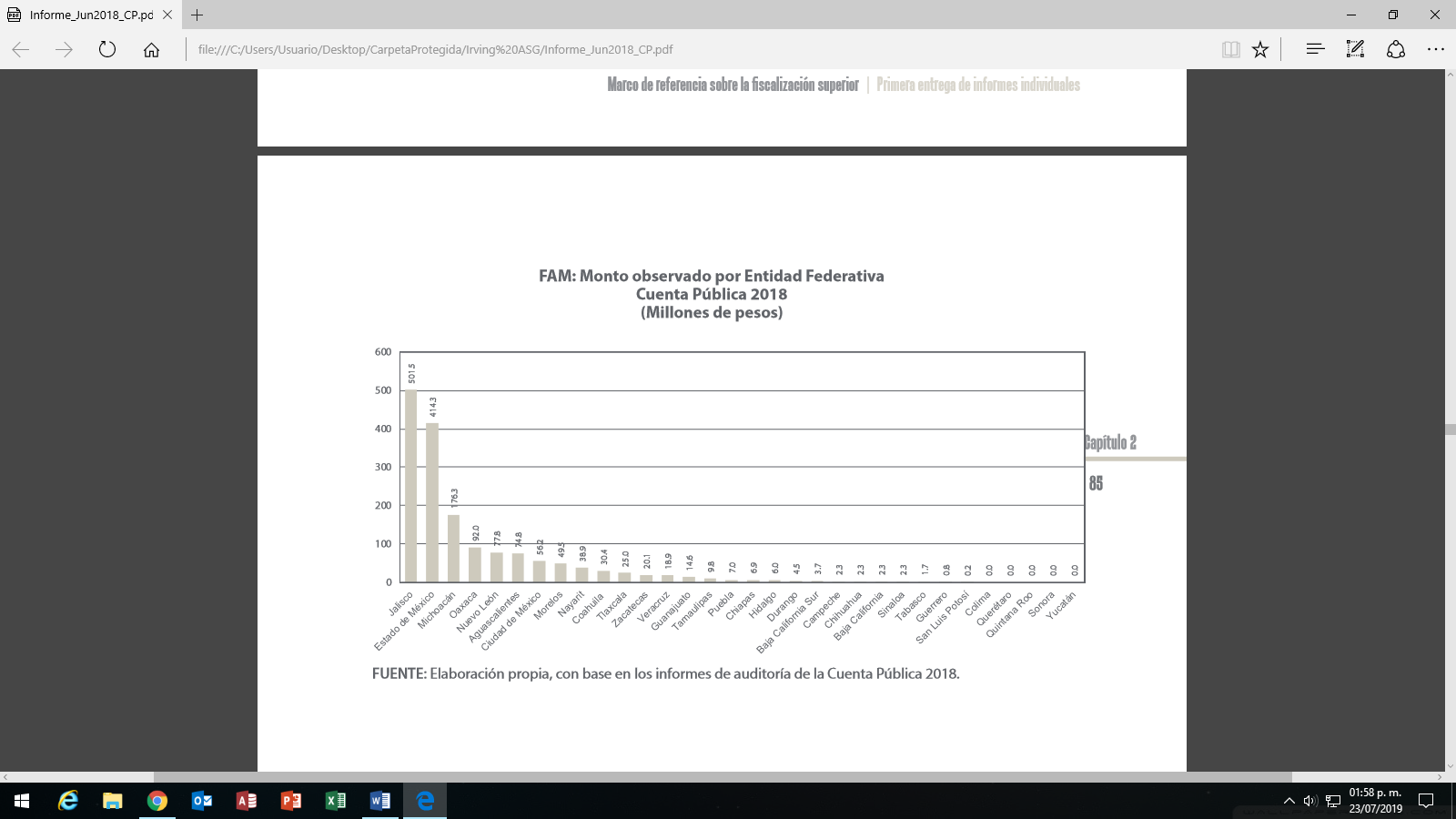
Auditorías al Gasto Federalizado



Fondo de Aportaciones Múltiples

El FAM tiene como principal objetivo contribuir al financiamiento de los programas de asistencia social en materia alimentaria para personas en situación de desamparo y vulnerabilidad social, así como para la atención de las necesidades relacionadas con la creación, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de planteles educativos de educación básica, media superior y superior en su modalidad universitaria. Los recursos del FAM se destinan en un 46% al rubro de asistencia social, mientras que el 54% restante es asignado a los componentes de infraestructura educativa.

Cabe señalar que el 25% de los recursos del FAM se ejerce como garantía de pago respecto de las obligaciones que se contraen en virtud de la implementación de mecanismos de potencialización de los recursos del fondo, con la finalidad de destinarlos a planteles educativos con mayores necesidades en materia de infraestructura física educativa, a través del Programa Escuelas al CIEN.



La muestra auditada del FAM ascendió a 12,746.4 mdp, y se formularon observaciones derivadas de irregularidades en el ejercicio de los recursos por 1,640.4 mdp; cifra que representó el 12.9% de dicha muestra.

Por entidad federativa, el indicador señalado registró un mayor porcentaje en el estado de Jalisco, en donde se observó un importe de 501.5 mdp; cifra que significó el 78.7% de la muestra auditada en dicha entidad. Asimismo, para el Estado de México con 414.3 mdp observados, representó el 34.8%. Por lo anterior, desde la perspectiva de la ASF, resulta fundamental que estos estados establezcan medidas que coadyuven a mejorar o fortalecer la gestión de los recursos del fondo, a efecto de lograr el cumplimiento de sus metas y objetivos.

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

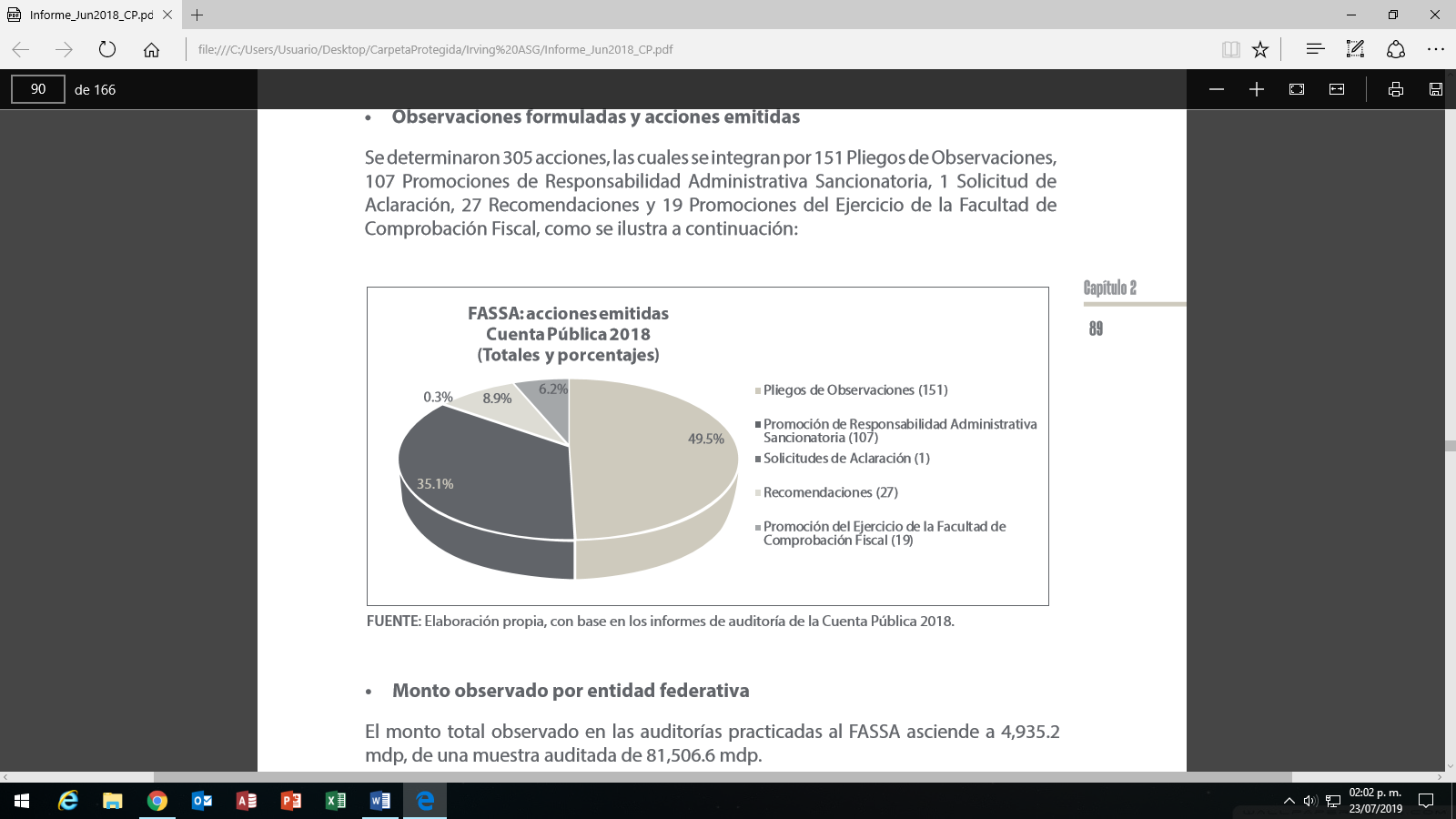
El principal objetivo del FASSA consiste en aportar recursos a las entidades federativas para la prestación de servicios de salud a la población que no se encuentra incorporada en ningún régimen de seguridad en salud, mediante la implementación de mecanismos que apoyen las actividades de protección contra riesgos sanitarios, la promoción de la salud y prevención de enfermedades, la mejora en la calidad de la atención y la seguridad en salud, así como el abasto y la entrega oportuna y adecuada de medicamentos.

El artículo 29 de la LCF dispone que los recursos de este fondo se deben destinar a los estados y a la Ciudad de México para el ejercicio de las atribuciones que les corresponden conforme a los artículos 3°, 13 y 18 de la Ley General de Salud.

Los recursos asignados al FASSA en 2018 ascendieron a 95,316 mdp, 4.8% más que en 2017. Asimismo, de los recursos asignados en 2018 al Ramo 33, el FASSA representó el 13.7%.

Para la revisión del FASSA en las 32 entidades federativas se seleccionó un universo de 95,294.3 mdp y se determinó un monto total observado de 4,935.2 mdp, lo que representa un incremento del 37%, en comparación con 2017. Asimismo, derivado de la intervención de la ASF, se reintegraron a la TESOFE 81.6 mdp y se quedaron pendientes de aclarar 4,853.6 mdp.

Se determinaron 305 acciones, las cuales se integran por 151 Pliegos de Observaciones, 107 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 1 Solicitud de Aclaración, 27 Recomendaciones y 19 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal.



El monto total observado en las auditorías practicadas al FASSA asciende a 4,935.2 mdp, de una muestra auditada de 81,506.6 mdp.

Las entidades federativas con el mayor monto observado son el estado de Oaxaca, con un importe de 1,446.3 mdp, y Chiapas, con 1,068.1 mdp, por lo que es fundamental que dichos estados establezcan medidas para fortalecer el control de la gestión de los recursos del fondo, a efecto de cumplir con sus metas y objetivos.

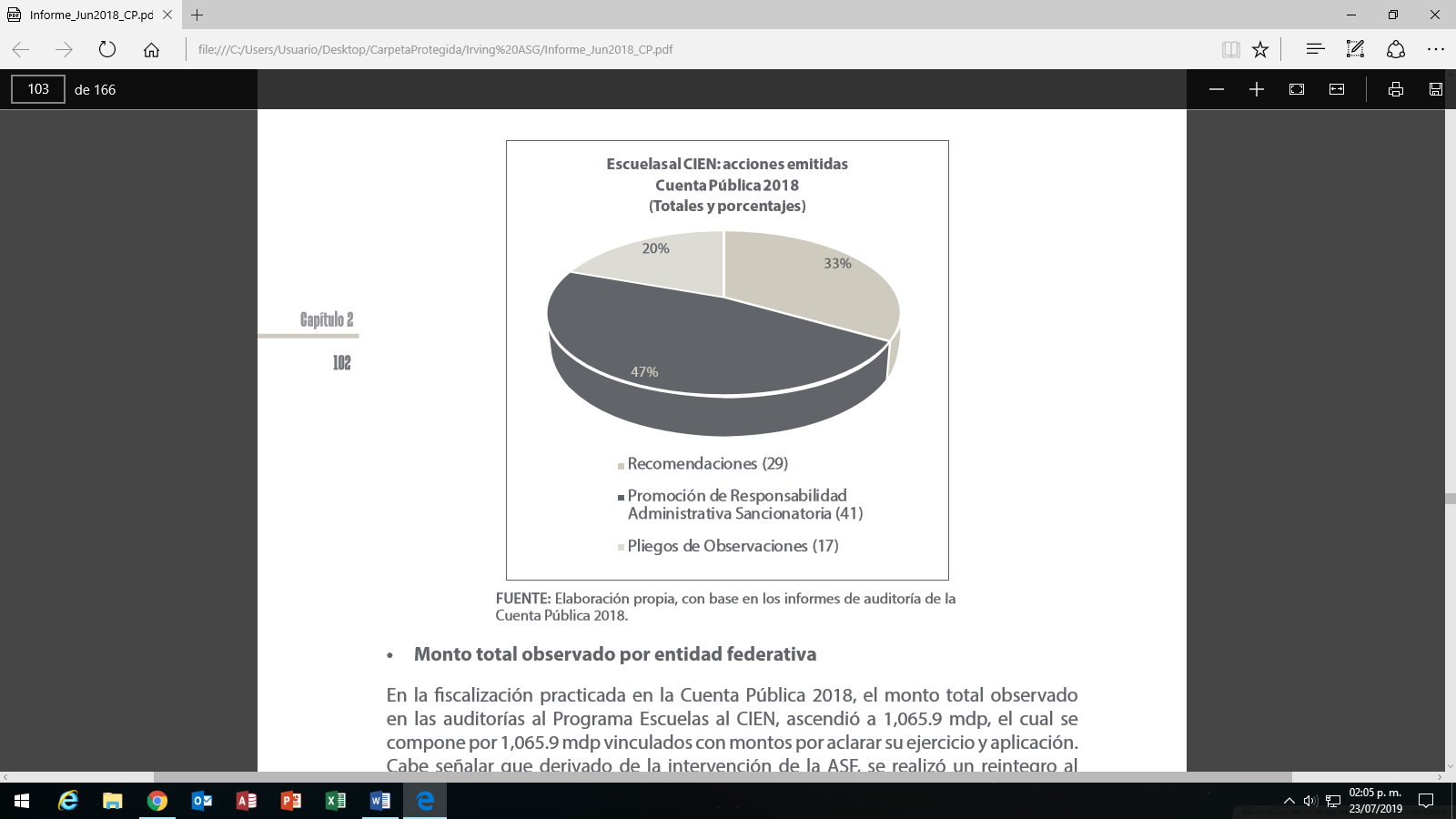
Escuelas al CIEN

Las metas y objetivos del Programa Escuelas al CIEN se enmarcan en un periodo de tres años (2015-2018), en los cuales el INIFED, así como los organismos responsables de la infraestructura física educativa de cada entidad federativa, deberán atender la construcción, equipamiento y rehabilitación de cerca de 34,000 centros de trabajo a nivel nacional.

En el marco del SNF, la ASF practicó 32 auditorías al Programa Escuelas al CIEN, al INIFED en su carácter de coordinador del programa, así como a los institutos de infraestructura educativa de cada una de las entidades federativas.

En la revisión de la Cuenta Pública 2018, realizada a los recursos federales transferidos mediante el Programa Escuelas al CIEN, se seleccionó un universo de 11,089.8 mdp y una muestra de auditoría de 7,642.1 mdp, que significó un alcance del 68.9%.

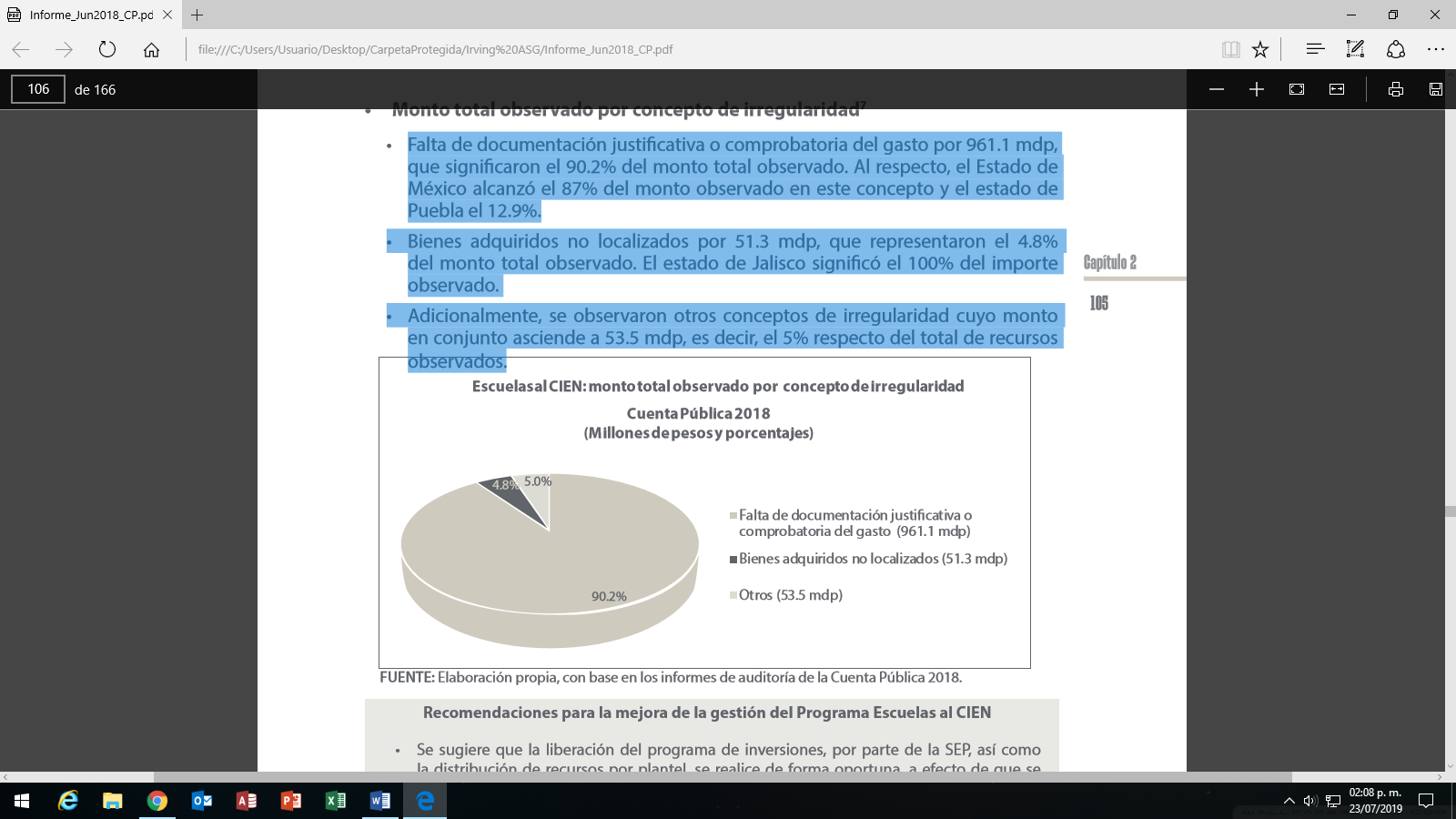
Como resultado de las auditorías se determinaron 172 resultados con observación, de los cuales, 91 resultados con acciones fueron solventados antes de la emisión de los informes individuales de auditoría, y 81 se encuentran pendientes de solventar o atender. De éstos, se derivaron 87 acciones, las cuales se componen de la siguiente forma:



En la fiscalización practicada en la Cuenta Pública 2018, el monto total observado en las auditorías al Programa Escuelas al CIEN, ascendió a 1,065.9 mdp, el cual se compone por 1,065.9 mdp vinculados con montos por aclarar su ejercicio y aplicación.

Dentro del marco de la irregularidad se ha detectado:

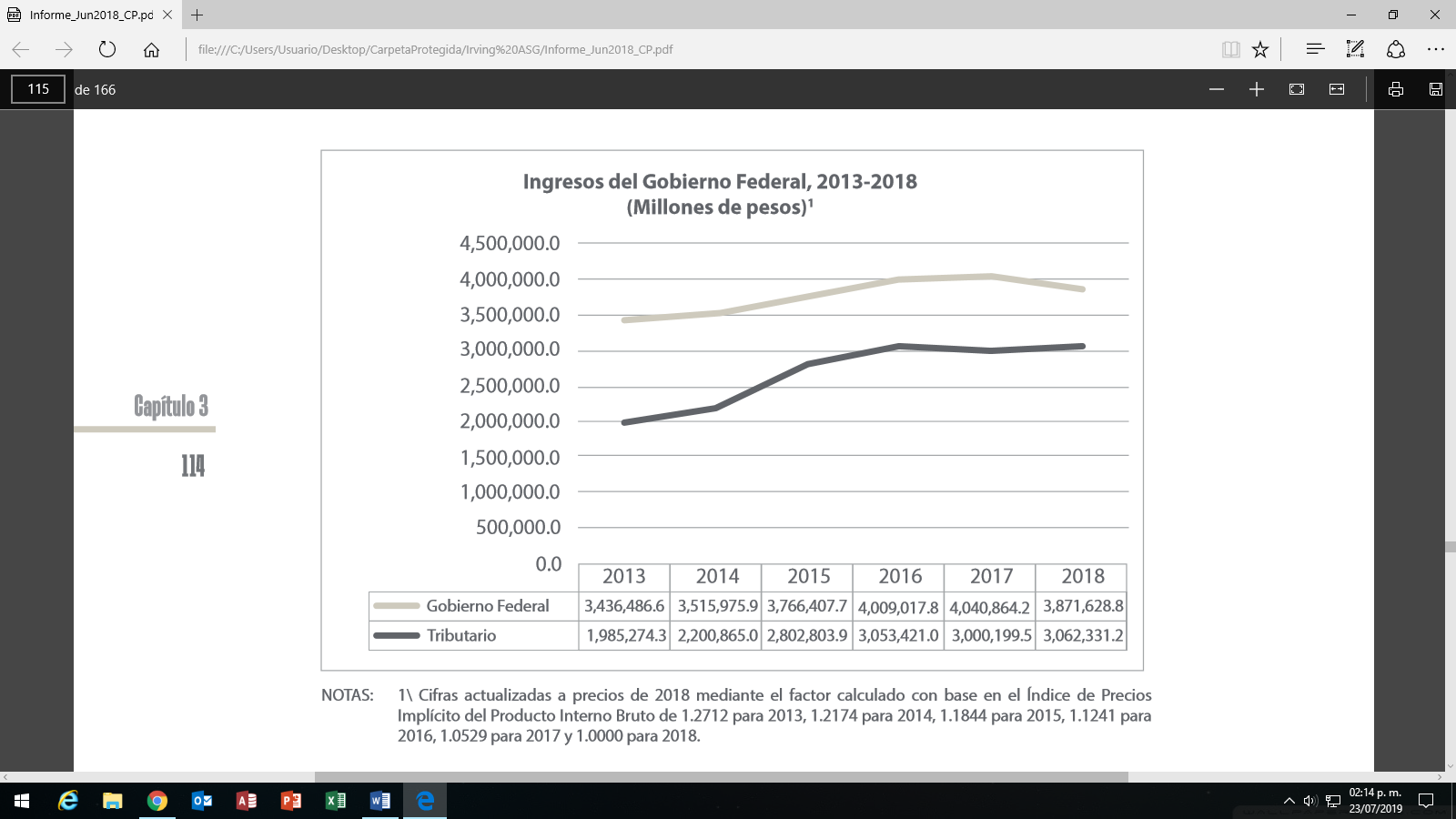
* Falta de documentación justificativa o comprobatoria del gasto por 961.1 mdp, que significaron el 90.2% del monto total observado. Al respecto, el Estado de México alcanzó el 87% del monto observado en este concepto y el estado de Puebla el 12.9%.
* Bienes adquiridos no localizados por 51.3 mdp, que representaron el 4.8% del monto total observado. El estado de Jalisco significó el 100% del importe observado.
* Adicionalmente, se observaron otros conceptos de irregularidad cuyo monto en conjunto asciende a 53.5 mdp, es decir, el 5% respecto del total de recursos observados.



En el capítulo 3 se parecía el Seguimiento a temas relevantes auditados anteriormente, tocando temas como el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, evaluación de políticas públicas: identificación de problemas estructurales y nos enfocaremos en la participación de las Finanzas públicas.

En 2018, los ingresos del Gobierno Federal totalizaron 3,871,628.8 millones de pesos (mdp), de los cuales el 79.1% (3,062,331.2 mdp) correspondió a ingresos tributarios, dicha cifra permitió que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) cumpliera la meta de recaudación de ingresos tributarios en 103.5%, al captar 3,062,331.2 mdp de los 2,957,469.9 mdp aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de ese año.

De 2013 a 2018, los ingresos tributarios se incrementaron en 9.1% en promedio anual, al pasar de 1,985,274.3 mdp en 2013 a 3,062,331.2 mdp en 2018; sin embargo, de 2016 a 2018 se mantuvieron en un rango de entre 3,053,421.0 mdp y 3,062,331.2 mdp.



Estos resultados obedecen a que, en 2018, aumentaron:

* el número de contribuyentes registrados,
* el monto recuperado mediante juicios fiscales y actos de fiscalización,
* la recuperación de créditos fiscales.

En el Registro Federal de Contribuyentes, el SAT registró 7,734,803 altas al padrón de contribuyentes y presentó 764,930 bajas, con lo que se totalizan 71,795,905 contribuyentes; cifra superior en 11% respecto de lo registrado en 2017 (64,672,335).

Los juicios fiscales ganados también incidieron positivamente en la recaudación, ya que el SAT litigó 18,609 juicios fiscales por 156,584.2 mdp, de los cuales ganó el 48.5% (9,020), perdió el 41.2% (7,660) y el 10.3% (1,929) se declararon nulos. Considerando el monto de los juicios ganados, se recuperó el 73.8% (115,547.3 mdp) de los recursos en litigio.

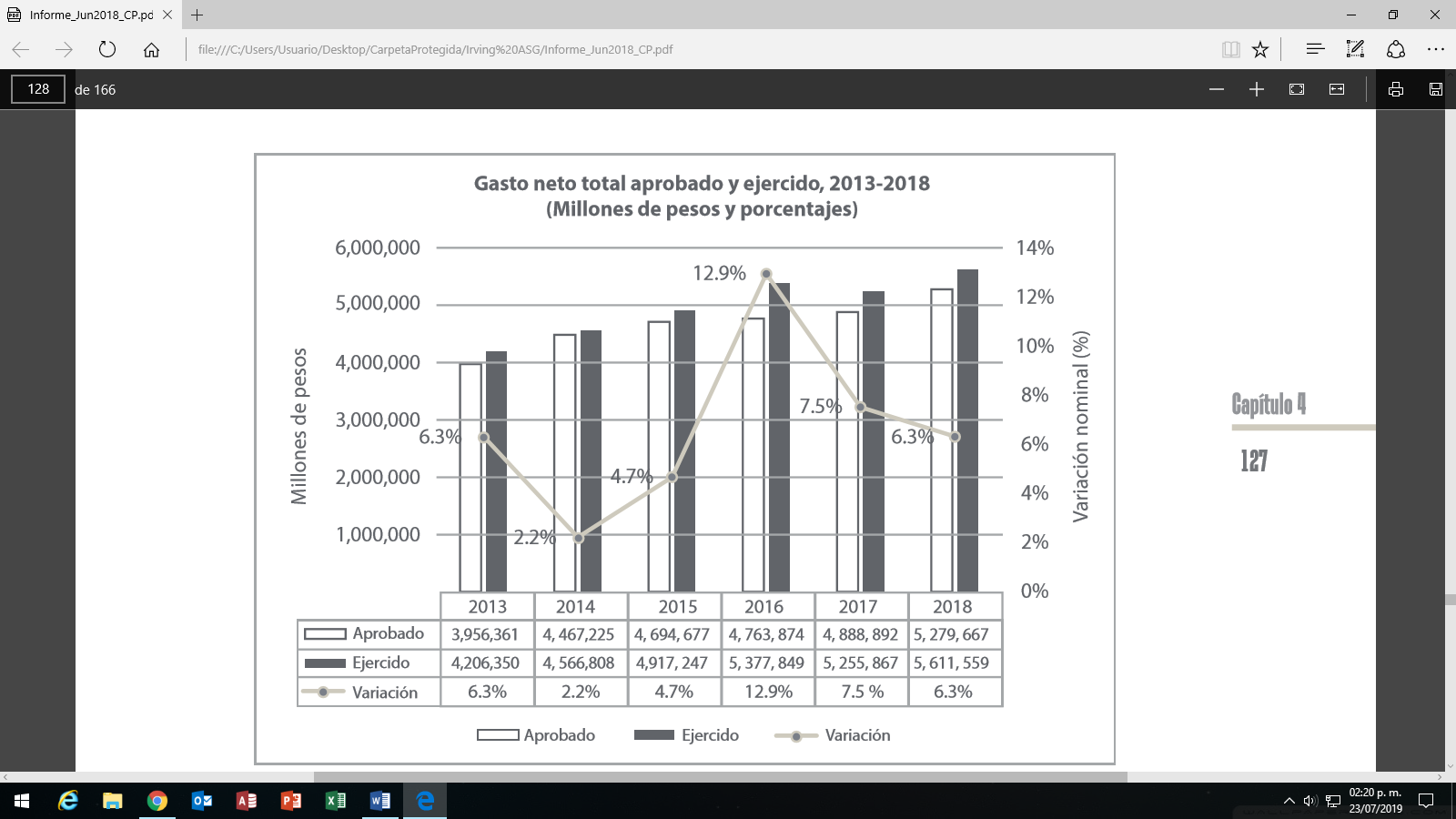
En 2018, el SAT efectuó 63,259 actos de fiscalización; cifra superior en 21.2% de lo previsto. De éstos, 98.1% (62,077) correspondieron a otros contribuyentes y 1.9% (1,182) a grandes contribuyentes, lo que se tradujo en la recuperación de 191,563.4 mdp, de los cuales 55.9% (107,175.1 mdp) correspondieron a grandes contribuyentes y 44.1% (84,387.3 mdp) a otros contribuyentes.

En el capítulo cuarto vemos la Prospectiva de la fiscalización que destaca la Gestión del gasto público el cual a partir de la labor fiscalizadora de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se ha identificado la existencia de numerosas áreas de riesgo, opacidad y falta de control, tanto en la gestión de los ingresos como en el gasto público, destacan:

* Diferencias entre las variables macroeconómicas observadas y las reportadas en los Criterios Generales de Política Económica;
* Discrecionalidad en la estimación del Producto Interno Bruto (PIB) potencial y la brecha del producto determinada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP);
* Falta de registro en las Cuentas Públicas, de todas las obligaciones financieras y de los pasivos contingentes;
* Carencia de transparencia y rendición de cuentas respecto a los ingresos excedentes y el presupuesto de gastos fiscales;
* Opacidad en las adecuaciones presupuestarias y falta de vínculo con las metas de los programas presupuestarios;
* Transferencias recurrentes del gasto programable hacia dependencias, organismos intermediarios, fideicomisos y entidades federativas;
* Uso insuficiente de la información sobre el desempeño de los programas para orientar la toma de decisiones;
* Áreas de opacidad en la planeación, programación y presupuestación de los proyectos de inversión en sus diversas modalidades, e
* Incumplimiento de las disposiciones en materia de armonización contable.

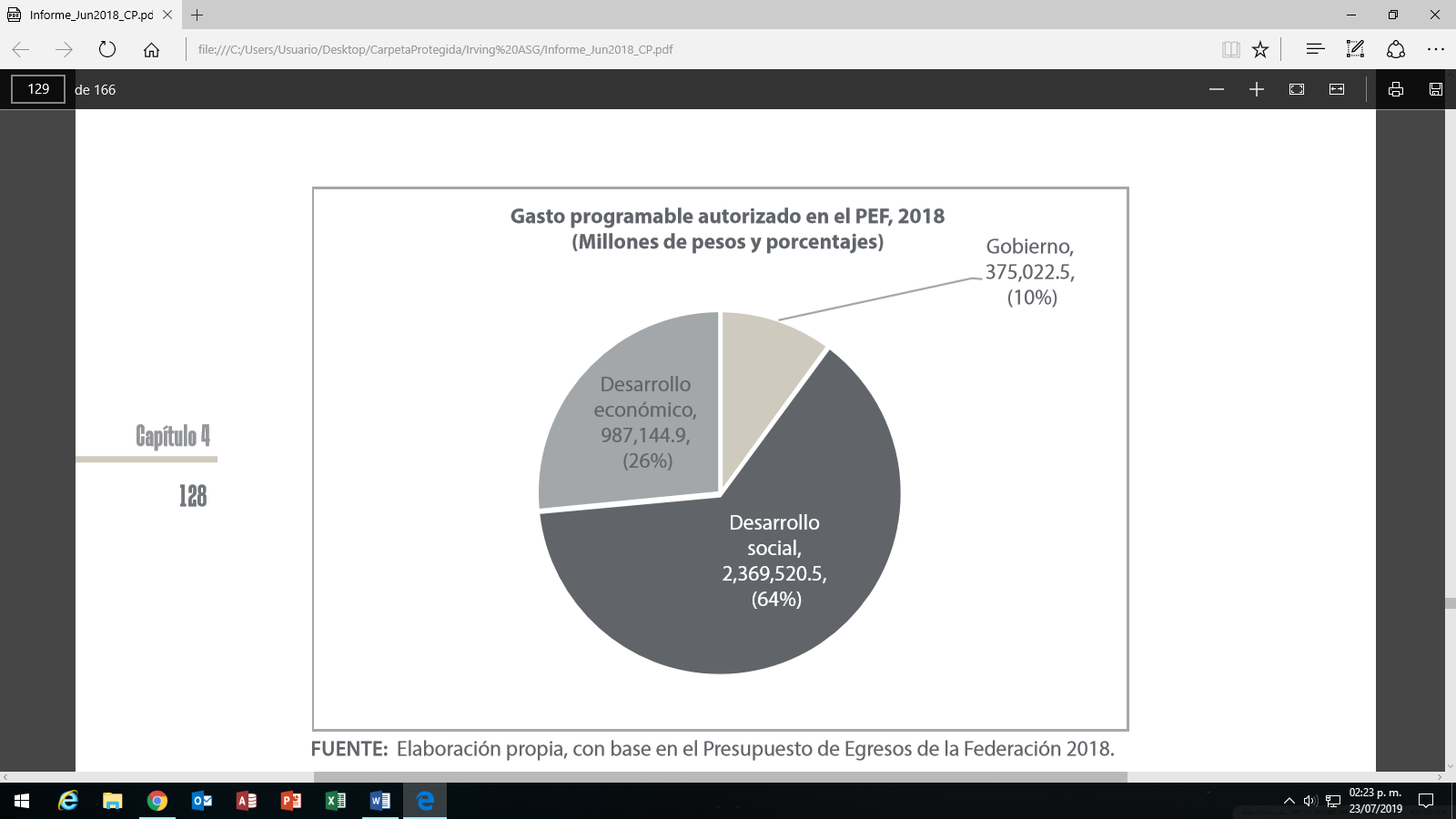
De 2010 a 2016, la SHCP justificó el déficit en las finanzas públicas por la expansión del nivel de gasto público, lo que significó un incremento del Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, al pasar de 36% del PIB en 2010, a 48.7% en 2016.

En 2017, se determinó que los ingresos presupuestarios para financiar el gasto público fueron insuficientes, en razón de que sumaron 4,947,608.3 millones de pesos (mdp), que equivalen al 22.7% del PIB; monto inferior en 0.6 puntos porcentuales al 23.3% del PIB de 2013, debido a la disminución de los ingresos petroleros en 4.0 puntos porcentuales, al pasar de 7.8% en 2013 a 3.8% del PIB en 2017. En el periodo de 2013 a 2017, los ingresos presupuestarios cubrieron en promedio el 90.6% del gasto público.

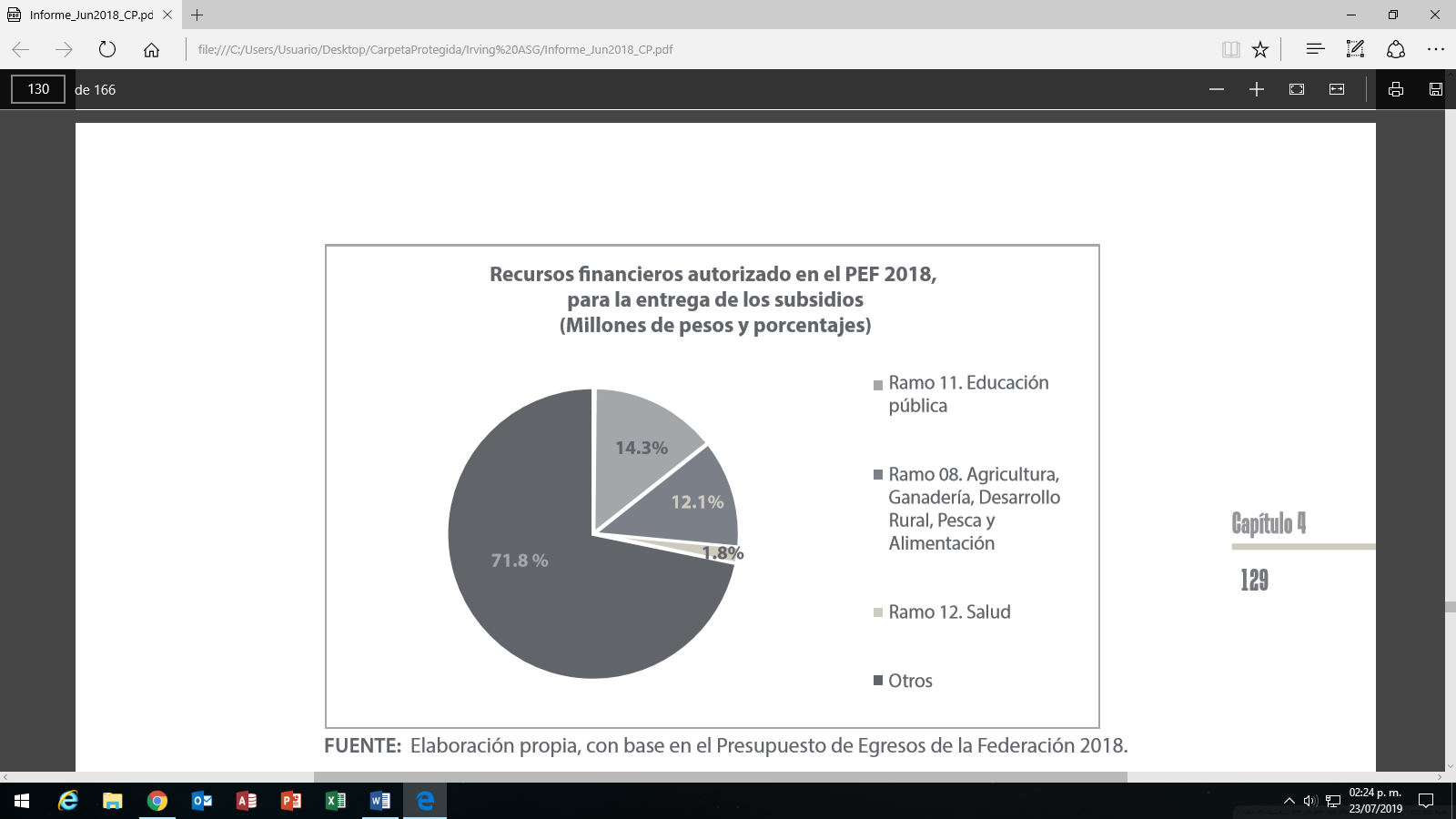


El gasto ejercido ha sido mayor que el aprobado por la Cámara de Diputados, aunque el balance presupuestario se mantiene en el mismo nivel aprobado, debido a que el mayor gasto se financia con ingresos excedentes y por medio de reasignaciones.

La política social se integra por el gasto directo del Gobierno Federal y el otorgamiento de subsidios para el cumplimiento de los derechos sociales, como la alimentación, la salud, la educación y el trabajo. En 2018, en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) se autorizaron 3,731,687.9 mdp para la operación de 152 programas presupuestarios de desarrollo social, económico y gobierno, cuya distribución se muestra a continuación:

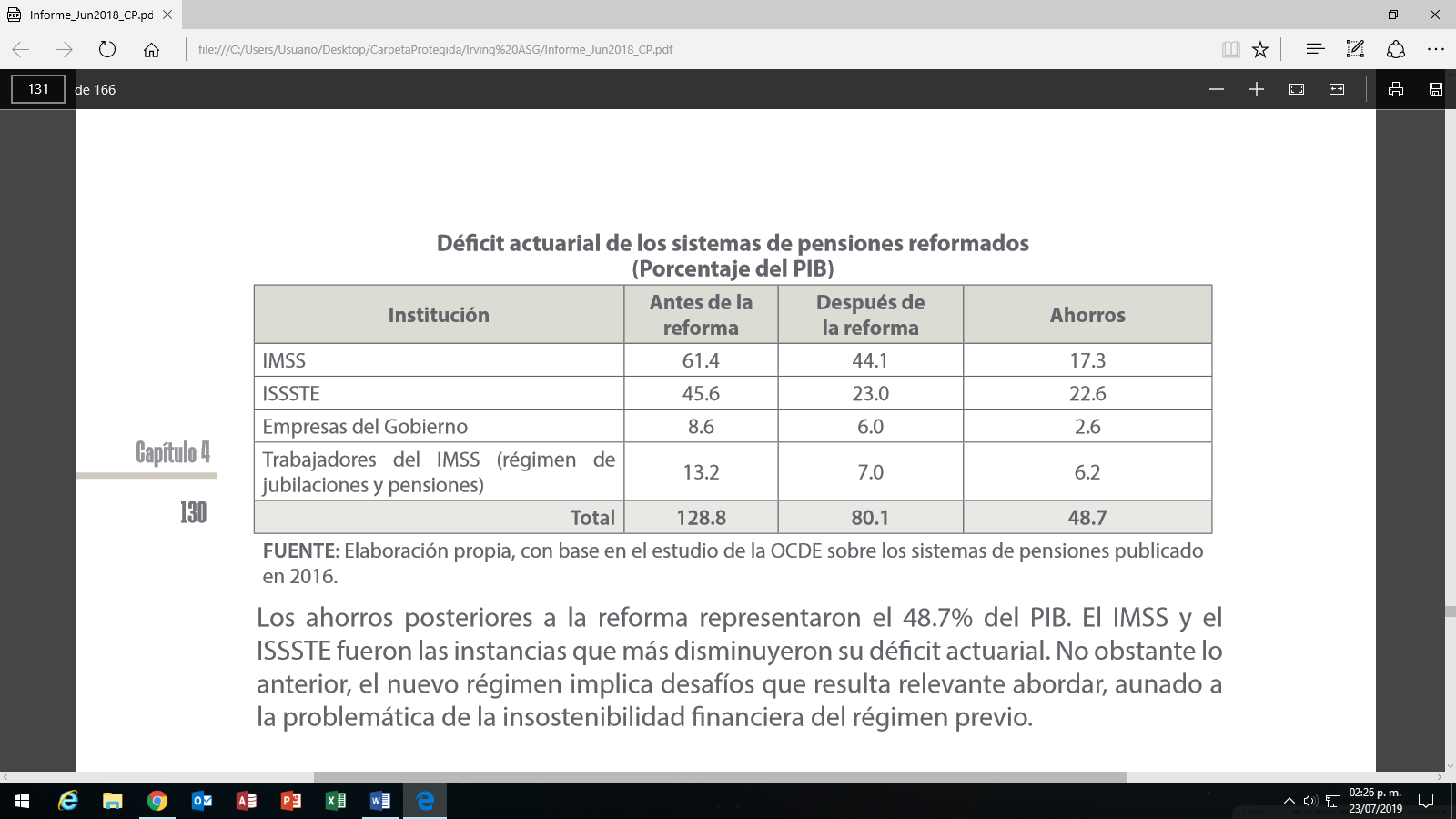


En 2018, en el PEF se autorizó el ejercicio de 462,987.3 mdp en el capítulo de subsidios, de los cuales, el 14.3% se destinó al Ramo 11 Educación Pública (66,206.0 mdp); el 12.1% (56,180.9 mdp) al Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y el 1.8% al Ramo 12 Salud (8,140.3 mdp)



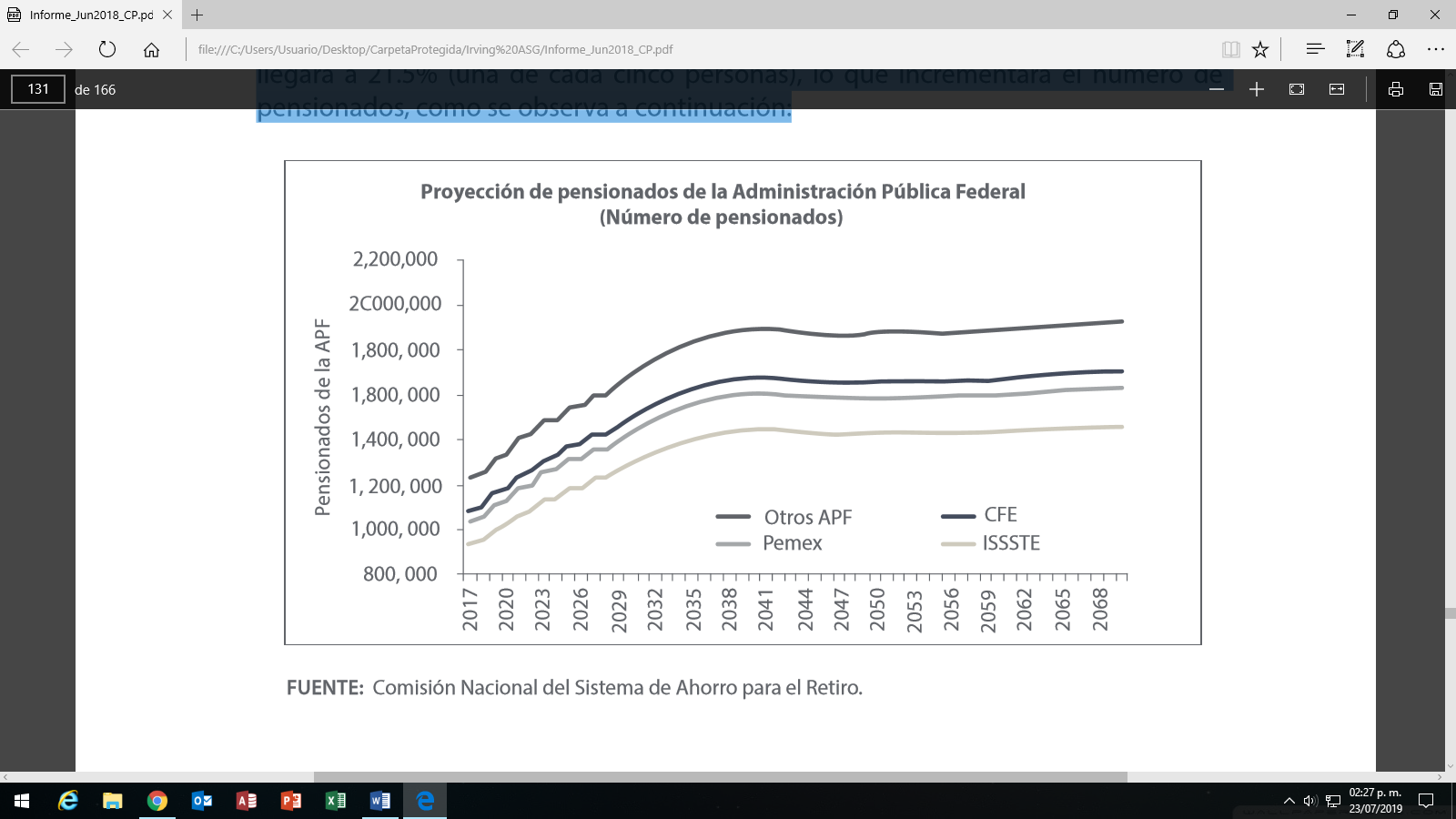
Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2018, la ASF programó ocho auditorías de desempeño al mismo número de programas presupuestarios, con una cobertura del 100% de los recursos autorizados en el PEF para la entrega de subsidios (56,180.9 mdp) del Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Jubilaciones y pensiones



Los ahorros posteriores a la reforma representaron el 48.7% del PIB. El IMSS y el ISSSTE fueron las instancias que más disminuyeron su déficit actuarial. No obstante, lo anterior, el nuevo régimen implica desafíos que resulta relevante abordar, aunado a la problemática de la insostenibilidad financiera del régimen previo.

Los recursos destinados al pago de pensiones y jubilaciones pasaron de 388,660 mdp en 2008 a 1,793,734 mdp en 2018. De acuerdo con estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Consejo Nacional de Población, en 2023 los adultos de 60 años o más representarán el 12.3% de la población, y para 2050 el porcentaje llegará a 21.5% (una de cada cinco personas), lo que incrementará el número de pensionados, como se observa a continuación:



Fiscalización de la Agenda 2030

Desde el ámbito de la fiscalización, la ASF ha contribuido a la consecución de la Agenda 2030, mediante:

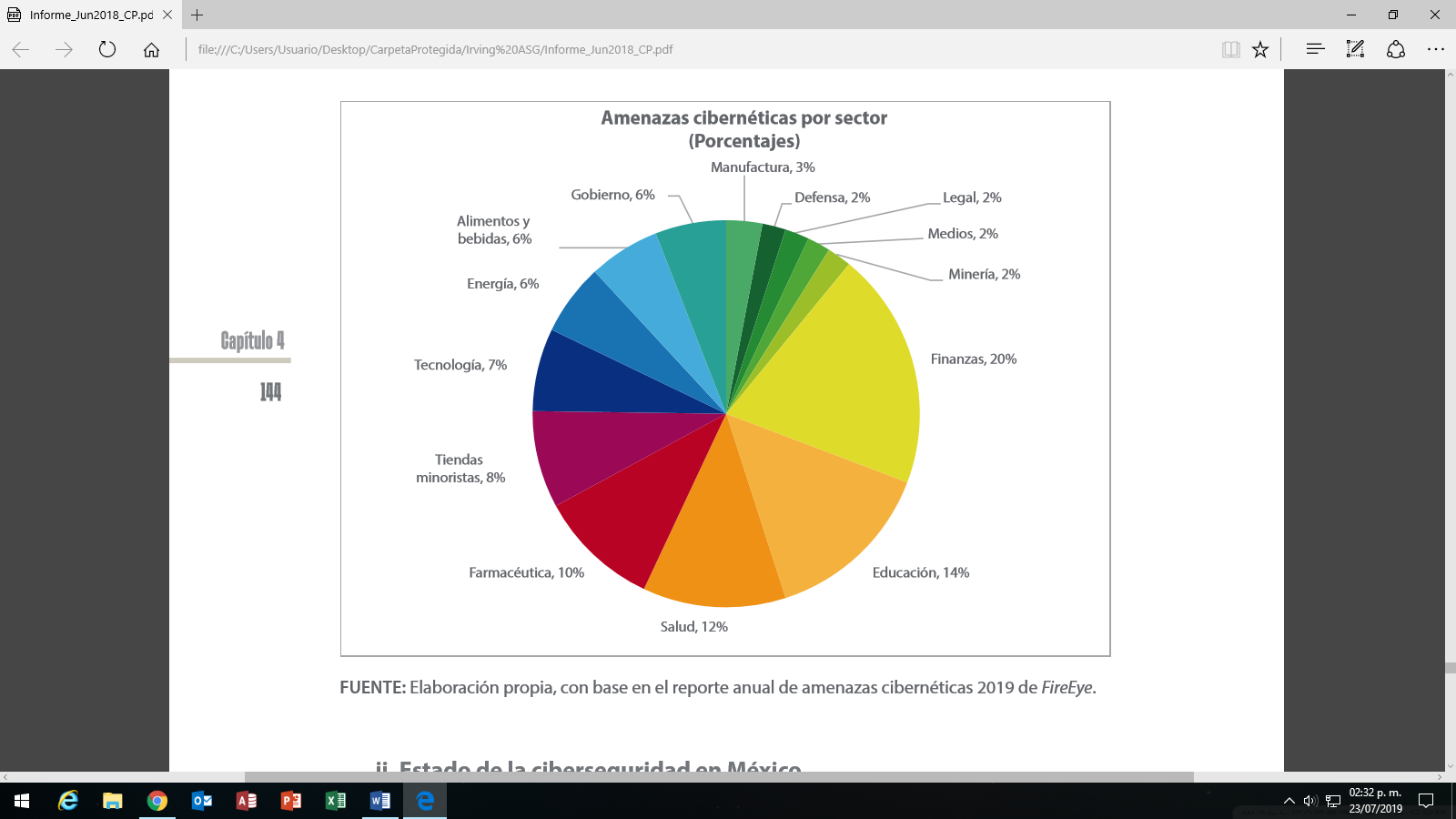
* la práctica de auditorías sobre los avances en su implementación a nivel nacional
* la instrumentación de auditorías coordinadas de carácter regional, que involucra la participación de varios miembros de la OLACEFS. Lo anterior ha permitido contar con información sobre algunas limitaciones del sector público respecto a la adopción de los ODS.

Por otra parte, a nivel regional se registran avances en la institucionalización de la Agenda 2030; sin embargo, aún se observan problemáticas como falta de coordinación e indefinición de atribuciones entre las instancias gubernamentales responsables de su implementación, así como deficiencias en el diseño de metas e indicadores nacionales para dar seguimiento a los ODS.

Importancia de la ciberseguridad

En los últimos años, el uso de tecnologías de la información y comunicaciones ha modificado, significativamente, la forma en cómo se relacionan los grupos sociales, incluyendo las organizaciones públicas.

El sector que recibe un mayor número de ataques cibernéticos es el financiero, con un 20% del total, seguido por el educativo con un 14%, y el de salud con un 12%, de acuerdo con el Reporte 2019 sobre Amenazas Cibernéticas, elaborado por la firma especializada Fireeye, como se muestra en la siguiente gráfica.



En la actualidad, existen varios parámetros comparativos sobre las medidas de ciberdefensa implementadas por los países. Al respecto, uno de los indicadores más utilizados a nivel mundial es el Índice Global de Seguridad (GCI) emitido por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Dicho indicador se basa en los siguientes tipos de criterios vinculados con la ciberseguridad y el cibercrimen:

* Legales: hace referencia a la existencia de instituciones y disposiciones normativas.
* Técnicas: involucra a las instituciones y marcos de referencia técnicos.
* Organizacionales: implica la instrumentación de estrategias y políticas de coordinación interinstitucional.
* Construcción de capacidades: se refiere a la implementación de programas de entrenamiento y educación, así como a la existencia de profesionales certificados y entidades del sector público que fomenten el desarrollo de capacidades en ciberseguridad.
* Cooperación: mide la existencia de asociaciones, marcos de cooperación y redes para compartir información relevante.

Para el primer trimestre de 2019, la ASF migró sus servicios de capacitación a una plataforma e-learning, que ofrece a los usuarios:

* accesibilidad desde dispositivos móviles
* materiales de consulta frecuente
* foros colaborativos
* herramientas de comunicación por mensajería instantánea o sesiones virtuales (audio y video en vivo).

Nota:

Los datos fueron tomados del INFORME DEL RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2018.